

SANTIAGO ALBA

PARA LA HISTORIA DE ESPAÑA

ARTICULOS PUBLICADOS
EN MAYO DE 1930 POR

El  Sol



Residencia
de Estudiantes



Residencia
de Estudiantes



Residencia
de Estudiantes



Residencia
de Estudiantes



Residencia
de Estudiantes



Residencia
de Estudiantes



Residencia
de Estudiantes



Residencia
de Estudiantes



Residencia
de Estudiantes

PARA LA HISTORIA DE ESPAÑA



Residencia
de los estudiantes



Residencia
de los estudiantes



Residencia
de los estudiantes



Residencia
de los estudiantes



Residencia
de los estudiantes



Residencia
de los estudiantes



Residencia
de los estudiantes



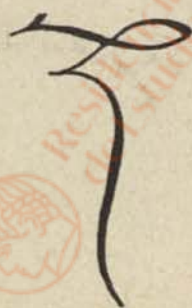
Residencia
de los estudiantes



Residencia
de los estudiantes

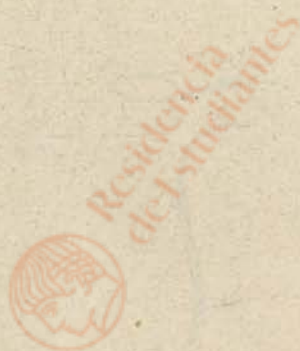
SANTIAGO ALBA

PARA LA HISTORIA
DE ESPAÑA

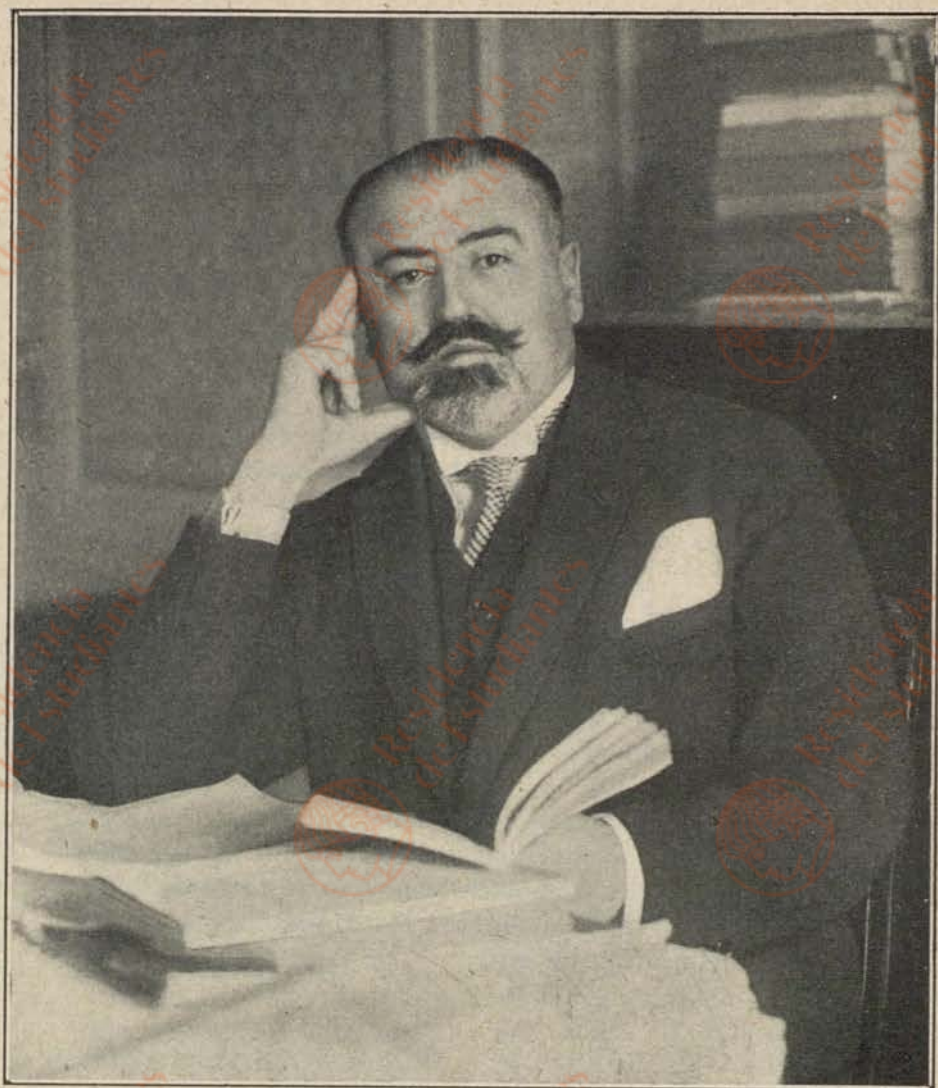


ARTICULOS PUBLICADOS
EN MAYO DE 1930 POR

El  Sol



DIANA, Artes Gráficas.—Larra, 6, MADRID



P. M. H.

Los artículos del señor Alba contenidos en este folleto fueron publicados exclusivamente en Madrid por EL SOL. EL SOL adquiere con frecuencia la exclusiva para publicar los trabajos literarios o políticos más notables que se producen en el mundo.

El lector de EL SOL sabe que, además de la abundante y selectísima colaboración de autores nacionales y extranjeros que su periódico le sirve a diario, disfrutará siempre las primicias de cualquier trabajo sensacional que aparezca en cualquier parte.

EL SOL es el periódico más amplio y minuciosamente informado de toda España. Posee una vastísima red de corresponsales y colaboradores en toda la nación y en las capitales de Europa y América.

Además de sus páginas semanales dedicadas al libro, a la mujer, el niño y el hogar, al turismo, a los deportes, a la medicina, dedica a diario gran espacio a los cuestiones económicas y financieras, para las cuales dispone de una organización informativa por nadie igualada.

EL PRONUNCIAMIENTO

Acepto con gusto el requerimiento de "La Nación". En los primeros meses de la Dictadura española fui ya invitado por este gran diario americano para exponer en una amplia interviú los puntos de vista de la oposición constitucional española después del golpe de Estado. Hoy me pide que escriba lo que podríamos llamar la paralela democrática a los cuatro artículos publicados por el general Primo de Rivera. Hágo lo honrado y complacido.

Propósito.

No siento ansias polémicas, que no tienen siquiera posibilidad material, muerto el que fué dictador en España, ni guardarían congruencia con la actitud de digno silencio en que he vivido en mi retiro de París durante más de seis años de voluntario ostracismo. Pero creo que es de interés evidente para el estudio de la historia de aquel período, ya iniciado entre los hombres cultos de todos los pueblos, que no se oiga sólo la voz del caudillo sublevado el 13 de septiembre de 1923, sino también la de los que fueron blanco de sus diatribas. He dicho además muchas veces que no hay hoy en el mundo causa política que pueda ni deba encerrarse en los límites de la órbita puramente nacional o local. El sentido universal de las ideas y de las evoluciones en los pueblos modernos es un imperativo de los tiempos que se refleja en su propia constitución interna, singularmente en las democracias. Escribo, pues, para los extranjeros mucho más que para mis compatriotas. Sirva a éstos de advertencia lo que dejo dicho, a fin de que no les sorprendan explicaciones y apostillas que resultan ya vulgares en España, pero que son ciertamente indispensables para los que no nos conocen o, lo que es peor, nos conocen con error, fruto de informaciones apasionadas o bien retribuidas.

No me dejaré impulsar ni aun por las legítimas vehemencias que produce en un alma honrada el recuerdo doloroso de la iniquidad. Pero creo que nadie puede pedirme que violente la relación leal de los hechos, ni la expresión sincera del juicio, por falsos estímulos de piedad ante la muerte. Salvo por adelantado cuanto un espíritu cristiano y un corazón hidalgo han de rendir a la tumba del adversario. Invoco también, no ya mi derecho de hombre político agraviado y perseguido sañudamente, sino mi deber de escritor veraz, para corresponder con austera probidad a la solicitud de "La Nación". Para mis adversarios, más que para mis amigos y para los neutrales, recuerdo las palabras serenas que el glorioso manco escribiera al comenzar el segundo libro de "Don Quijote": "Válame Dios, y con cuánta gana debes de estar ahora esperando, lector ilustre o quier plebeyo, este prólogo, creyendo hallar en él venganzas, riñas y vituperios... Pues en verdad que no te he de dar este contento, que puesto que los agravios despiertan la cólera en los más humildes pechos, en el mío ha de padecer excepción esta regla."

Acudiré principalmente a la relación de los hechos, con preferencia a los comentarios, en cuanto éstos no hayan de aclarar lo sucedido y narrado. Huiré de la retórica, que tiene escaso aprecio en los países que principalmente han de leerme, y aun ya en España misma. Aportaré los textos y las cifras siempre que ello sea posible. No traeré a estos artículos, inspirados en un elevado espíritu de imparcialidad, de amor al Derecho y de servicio a la causa de España, reivindicación alguna que me afecte exclusivamente. "Mi caso" ha sido ya juzgado por todos los españoles. Lo ha sido también por la conciencia universal. Creo sinceramente que lo fué por el propio general Primo de Rivera. De ello es muestra la rectificación contenida en el primero de sus artículos a "La Nación", al escribir mi nombre. Faltóle sin duda a él, hombre tenido por valeroso, aquel supremo valor moral que consiste en confesar públicamente, sin atenuaciones, el error o la falta propios; como antes habíale faltado para dejar que circulase libremente la noticia del resultado de las investigaciones policíacas y administrativas contra mí incoadas, y los fallos inapelables del Tribunal Supremo, uno y otros altamente favorables para mi gestión y para mi persona. Dijo el dictador, sin embargo, bastante para establecer un enorme contraste entre lo escrito recientemente y lo publicado a son de trompeta el 13 de septiembre inolvidable. Pido no más a los periódicos del mundo que no la hayan hecho ya la rectificación que me es debida.

Y, para cerrar el tema, repito con Thiers en un prólogo famoso, y salvando distancias y detalles, que "si yo osara hablar de mi persona diría simplemente que jamás fuí más dichoso que cuando, restituído a un relativo descanso, pude reanudar mi profesión primera"... No es, por tanto, heroica ni ascética mi serenidad humana y comprensiva ante el curso de las cosas políticas en España, ni preciso tampoco de un esfuerzo formidable para decir limpia y tranquilamente lo sucedido de mi lado, y lo que pienso, ante los artículos del general Primo de Rivera, de sus narraciones y de sus juicios, así

como para expresar el mío propio acerca de la situación que la Dictadura ha creado en mi país.

El 12 de septiembre de 1923.

Encontrábame yo en San Sebastián como ministro de Estado (de Negocios Extranjeros o de Relaciones Exteriores en otros países), de jornada, al lado de la Corte y de los diplomáticos, que allí buscan hace años su habitual reposo veraniego. Había modificado la práctica de ir todos los días al Palacio Real de Miramar. Acudía a él solamente cuando el Rey me llamaba o cuando lo exigían los asuntos de gobierno. Aquel caso fué el que se produjo el 12 de septiembre de 1923, en cuya noche había de perpetrarse el golpe de Estado. Invitado telefónicamente por el mismo Soberano, acudí a la regia residencia a las once y media de la mañana.

Digo ante todo que no entra ahora en mi designio escribir una sola palabra, expresa ni velada, que envuelva el juicio crítico de la conducta de la Corona en relación con la preparación y el desarrollo de aquel suceso histórico. Después de un mutismo de seis años y medio, dominando los más justificados anhelos de mi alma, parecería extraño, y desde luego incongruente con tal circunspección—inspirada en respetos patrióticos, tanto más sinceros cuanto menos exhibidos ni encomiados—, que yo fuese ahora a plantear tema tan grave y trascendental, mediante una publicidad con visos de escándalo en diarios extranjeros. España, su opinión pública y su Parlamento tienen el derecho de conocer antes que nadie, por mis labios, con la solemnidad y la extensión debidas, semejante tema, tan arduo y trascendental. Cumpliré oportunamente ante una y otro mi obligación, más que satisfacer mi deseo. Hoy me limito a narrar lo que es estrictamente indispensable para ofrecer a los lectores “el otro lado” del panorama a que hizo a aquéllos asomar con sus artículos el general Primo de Rivera.

Me presenté en el palacio veraniego con varios decretos de escasa importancia, que no tenían urgencia ninguna. Pensaba yo que el Rey había de comunicarme algo que explicase su llamada. Nada me dijo de ello, sin embargo, en nuestra larga y afectuosa conversación, circunscrita a temas diversos y sin interés especial. Acaso si mi augusto interlocutor deseaba conocer mis impresiones se admiraría de mi serenidad y de mi reserva en aquella mañana inolvidable. Rechazo modestamente título alguno para producir tal sentimiento. La verdad es que yo ignoraba, en absoluto, a aquella hora cuanto se refería al movimiento militar de Barcelona. Nada me había prevenido nadie.

Un paseo en automóvil y una sonrisa singular.

Terminó nuestro diálogo con una amable invitación del Rey a que lo acompañase en el magnífico automóvil de una fábrica española

que acababa de recibir. Despedí el coche del ministerio y me senté en el suyo, al lado de Don Alfonso, que conducía con su pericia y su velocidad habituales. Recorrimos diversos sitios céntricos de San Sebastián en una mañana luminosa, de sol confortador y cielo azul riente... Las gentes nos veían pasar y comentaban sin duda la cordialidad del Rey con el ministro. No estaban en el secreto de lo que iba a surgir. Una de las personas con quienes nos cruzamos, en la bajada de Miramar, fué el todavía entonces ilustre jefe del partido liberal conservador, don José Sánchez Guerra. Mirónos y sonrió de un modo singular. La explicación de su sonrisa, en nada agresiva para la afectuosa amistad personal que hace tantos años nos une, no pertenece tampoco a este momento ni me incumbe a mí peculiarmente. El Rey, por último, tuvo la bondad de conducirme a mi propia casa, en el hotel residencia de las oficinas y del domicilio del ministro de jornada.

El primer aviso de Barcelona.

Apenas acomodado en mi despacho, uno de mis secretarios me entregó un pliego reservado que acababa de recibirse de Barcelona por conducto seguro. El pliego contenía unas líneas breves y de origen autorizado. Decía textualmente: "Ayer, día 9 de los corrientes, llegó el general Primo de Rivera. Se puso en seguida al habla con otros capitanes generales, por telegramas cifrados íntegramente. Hoy por la mañana, convocados por Primo de Rivera, ha habido reunión, en Capitanía general, de generales con mando y jefes de Cuerpo. Esta reunión ha tenido por objeto prevenir a los reunidos que los capitanes generales tienen acordado derribar a Alba y al Gobierno dentro de esta semana. Primo les ha exhortado a que estén preparados. Les ha dicho que tuvo el temor, al regresar de Madrid, de ser detenido en el camino por alguien que hubiese hecho traición comunicando al Gobierno lo que se preparaba."

En mi habitual conferencia telefónica, a la una de la tarde, con el ministro de la Guerra—en cuyo momento atendíamos diariamente a las necesidades derivadas del problema de Marruecos—hube de aludir sobriamente a la información que acabo de reproducir. Mi compañero de Gabinete, apenas escuchó el nombre "Barcelona", me recomendó que no prosiguiera y que esperáse un telegrama del presidente del Consejo, que en el instante se estaba poniendo en cifra, en sendos despachos dirigidos al Rey y a mí. Claro es que no necesité más para reputar exacta la información que yo había recibido.

A partir de aquel momento, los acontecimientos se desarrollaron con rapidez, y la reseña circunstanciada de todos ellos, que algún día haré para el libro, ocuparía mucho más espacio que el que discretamente puedo atribuir a esta parte de mi colaboración.

El telegrama del presidente del Consejo, mi digno amigo el marqués de Alhucemas, es a él a quien incumbirá, en ocasión debida, utilizarlo y comentarlo. Yo respeto, naturalmente, su derecho. Bas-

tará por hoy decir que confirmaba las noticias de una inminente sublevación militar en Barcelona, preparada y dirigida por el teniente general Primo de Rivera, que allí representaba al Gobierno. Señalaba también los nombres de diversos generales que habían de dirigir su repercusión en Madrid. Bastóme conocer tales nombres, habida cuenta de su significación y antecedentes, para atribuir al movimiento carácter, importancia y alcance singularísimos.

La dimisión telegráfica del ministro de Estado.

En las diferentes conferencias que con Madrid celebré hube de preguntar qué general había ido a encargarse del mando de Barcelona, en sustitución de Primo de Rivera. Se me contestó que el ministro de la Guerra—nombrado luego por la Dictadura alto comisario en Marruecos—entendía que no había necesidad de relevar a aquél y que bastaría una exhortación telefónica suya para que “Miguel” (*sic*) depusiera su actitud rebelde. Comprendí todavía más lo que ocurría. Y en el acto adopté la resolución de dimitir mi cargo, en telegrama que por hilo directo y en claro transmití al presidente del Consejo. Lo hice después de ir a un baile que aquella noche se daba en Miramar, organizado por la Reina Cristina, de buena memoria, y al que me pareció inexcusable concurrir para evitar alarmas y malicias, tanto más cuanto que se brindaba, por singular coincidencia, en honor de los jefes y oficiales de la guarnición.

Mi telegrama, bastante extenso, no cabría íntegro tampoco en las dimensiones naturales del presente artículo. Bastará reproducir algunos fragmentos. Decía en él, después de hacerme cargo de las noticias de Barcelona y del despacho del presidente del Consejo: “Yo soy, puesto que contra mí, aunque con injusticia notoria, se dirige principalmente la protesta, el que no puede, ni debe, ni quiere prolongar un ingrato forcejeo, que al convertirse ahora en una lucha viva entre el Gobierno y aquellos elementos militares, dada la situación de España, acarrearía las más trascendentales consecuencias para la Patria, la Monarquía y el orden social. Los que se titulan representantes del Ejército están lamentablemente equivocados en sus juicios y en sus procedimientos. Pero su error no podrá apreciarse y reconocerse, aun por ellos mismos, sino con el concurso del tiempo. Hablan en nombre de sentimientos legítimos en su origen y propugnan soluciones que acaso fuera ya lo mejor dejar que se ensayaran, *pero bajo la responsabilidad pública y constitucional* de los que las defienden. Por mi parte, tengo la conciencia tranquila de no haberme dejado arrastrar ni por las sugerencias de quienes ven en la guerra a fondo hoy, al cabo de tantos años, la solución que no pudo lograrse en circunstancias más propicias, ni por aquellos otros que me señalaban una halagadora popularidad, brindada a las conclusiones abandonistas más radicales.”

Antecedentes indispensables.

Son antecedentes indispensables para la cabal comprensión del anterior telegrama los que expreso a renglón seguido:

Primero. Como director de la política en Africa, yo había procurado, de acuerdo siempre con el Consejo de ministros, y particularmente con el de la Guerra, que no pudiera ya nunca repetirse la pregunta, tantas veces en otros tiempos formulada en el Parlamento y en la Prensa: "¿Quién gobierna en Marruecos?", como expresión de un estado de gestión y de responsabilidades difusas, a veces imposible de determinar, fáciles a producir catástrofes como la de Annual en 1921. En este sentido cuidé siempre de que el Alto Comisario—el inteligente Luis Silvela—se acomodara a la pauta trazada por el Gobierno mismo. Y que los generales, a su vez, recibieran y transmitieran por conducto del propio Alto Comisario las indicaciones y propuestas correspondientes.

Segundo. Este régimen de comunicación jerárquica y responsabilidad concreta halló conformidad y colaboración por parte del ministro de la Guerra, general Aizpuru, no sin cierta resistencia a veces de aquellos generales que preferían comunicar directamente, sin el trámite debido al alto comisario civil. Por primera vez, en el Consejo celebrado el 29 de agosto, el ministro de la Guerra dió noticia de telegramas e informes a él cursados fuera de aquel régimen, insistentemente acordado y mantenido por el Consejo de ministros. Señalé yo entonces la circunstancia, sin obtener explicación categórica. Fué el Consejo mismo en que conocimos un telegrama del capitán general de Cataluña, dirigido a su jefe el ministro de la Guerra, en términos tan impertinentes para el Gobierno, que yo hube de declarar que si un embajador los usase con el ministro de Estado lo destituiría incontinenti, sin perjuicio de dar cuenta más tarde al Gabinete. El general Primo de Rivera reconoce el hecho en el primero de sus artículos. Pero él, tan cuidadoso más tarde de su prestigio y aun de su vanidad en el Gobierno, lo explica afirmando que "no hay deber más terminante y claro para los generales que el de velar por la disciplina". Exacto, añadido yo ahora. ¡Pero por la disciplina no se vela acudiendo cada uno de aquéllos a su superior jerárquico con reclamaciones airadas e indiscretas en materia que no incumbe directamente al reclamante ni para nada se roza con su función propia al frente de un distrito militar!

Tercero. El capitán general de Cataluña—es extremo éste sobre el que habré de volver en otro artículo, y al que me refiero ahora exclusivamente por su relación con la preparación del pronunciamiento y el significado de algunos términos de mi telegrama de dimisión—constituía, por su conducta cerca de destacados elementos de Barcelona, el obstáculo más insuperable y más tenaz para el normal desenvolvimiento de una política acomodada a la del Gobierno.

Asociaba la dignidad de la fuerza armada a sus particulares puntos de vista, acertados o no, pero extraños a su función, que su mismo artículo evoca. En vez de secundar las iniciativas de los gobernadores civiles, si éstos así lo requerían, ponía cátedra contra ellas, alentaba las resistencias que sus medidas podían suscitar y hablaba sin cesar del próximo derrumbamiento de la situación entera. Así era imposible que se llegara nunca a solución ninguna de sacrificio y de concordia entre los elementos contrapuestos. Por lo mismo, en uno de los Consejos de fines de agosto yo sostuve, con algunos de mis compañeros, que procedía relevar de su cargo al capitán general de Cataluña, hecho del que tuvo conocimiento el interesado. Prodújose así el doble estrago de las sanciones que no llegan a imponerse: esterilidad para el bien público y agravio irreparable en la susceptibilidad privada.

Una visita al Rey.

Aseguré aquella noche del 12 al 13 el mantenimiento del orden y de la normalidad mediante el concurso caballeroso del general Querol, gobernador militar de la plaza, quien se mostró inflexiblemente dispuesto a secundar mis instrucciones mientras permaneciera en el Gobierno. Y gracias a sus rápidas medidas mantuve mi comunicación telegráfica y telefónica con Madrid y las provincias. Ello me permitió conocer diversas comunicaciones que también se realizaron.

Hice, a las diez de la mañana del día siguiente, mi visita de despedida al Monarca, con quien había por teléfono comunicado reiteradamente en la madrugada. Le ratifiqué mi opinión en términos parecidos a los de mi telegrama al presidente, y le anuncié mi propósito de marchar por la tarde a Noja (Santander), donde veraneaba mi anciana madre. Este propósito sufrió un cambio de destino. En vez de ir a aquel pueblecito de la Montaña hube de buscar refugio en el Pirineo francés, en Biarritz. Me detengo en el suceso para satisfacer la curiosidad del lector y para desmentir toda una serie de novelas más o menos absurdas que reiteradamente he leído en la Prensa y he escuchado a personas distintas.

A mediodía, después de mi venida de Palacio, el subsecretario de Estado, hoy embajador de España en Berlín, señor Espinosa de los Monteros, me leía desde Madrid el famoso manifiesto que llevaba la firma del capitán general de Barcelona, que ya circulaba en la corte y había sido publicado en algunos números extraordinarios de los periódicos. Desde Zaragoza se me transmitía un reiterado aviso telefónico exhortándome, a título amistoso, en los términos más vivos y cordiales, a que no permaneciera en España mientras los sucesos se desarrollaban. Al interlocutor le constaba que mi vida, en otro caso, corría serio peligro. El comunicante, que no dió su nombre, acompañaba su exhortación de datos y referencias que acreditaban un perfecto conocimiento de los sucesos y de la actuación de sus protagonistas allí y en Barcelona.

El general Querol, el general Moltó y el general Martínez Anido.

Por último, recibía yo la visita de dos caballeros jefes, compañeros de mi hermano, comandante de Artillería como uno de ellos. "Venían—me dijeron—a cumplir el que creían un deber de amistad con éste y de conciencia para mí." Me añadieron una completa información de lo que se preparaba para aquella tarde misma, en ocasión de mi viaje en automóvil a Noja. "Se ha recibido de Barcelona la orden telegráfica de detenerlo a usted." Coincidió esta afirmación con las noticias a aquella hora circulantes por toda España y publicadas en diversos periódicos. "El general Querol, artillero también, caballerosamente, se ha negado a cumplirla. Dice que es una indignidad, y que él, que fué siempre un soldado leal, no manchará su historia militar, próximo ya a pasar a la reserva. Se ha acudido al general Moltó, capitán general de la región, quien se ha negado igualmente, y no vendrá de Pamplona, donde se encuentra. Pero se ha buscado al general Martínez Anido, que aquí se halla hace pocos días, dispuesto a ponerse al frente de los sublevados. Se ha citado el precedente del ministro búlgaro Stamboulowski, muerto por la tropa en una carretera. Se ha hablado también de la "ley de fugas"... (el lector extranjero conocerá sin duda, como el español, el significado de esta trágica frase, de origen barcelonés). La escrupulosa fidelidad de la presente narración obliga a añadir que el general Martínez Anido me hizo saber, meses después de los sucesos referidos, que era, en efecto, cierto que aceptara el encargo de detenerme, pero que no lo había rechazado para evitar males mayores y con la intención de incumplirlo, acreditada, según él, dando tiempo a que yo pudiera salir de España antes de comunicarse instrucción ninguna a la frontera.

Aquellos dos bravos militares me describieron la situación toda y me mostraron la inutilidad y los peligros de mi resistencia. "Cuando se pierde la disciplina—me dijo uno de ellos conmovido—, el Ejército desaparece y actúa la soldadesca." Estreché fuertemente las manos de ambos caballeros, a quienes no he vuelto a ver más. Mi resolución estaba tomada. Dios me protegería, no para salvar mi vida, sino para no caer envuelto, sin honor y sin esperanza de reparación posible, en aquella oscura turbonada. Había que esperar a que pasase el vértigo de la difamación y se restableciera el imperio de la verdad. Era obligado dejar a la fuerza caracolear en su caballo loco con ímpetu irracional y aguardar el restablecimiento de la justicia, serena, imparcial, reparadora. Había, en suma, que vivir, para defenderse y para defender a España.

Un retroceso de un siglo.

Conluí de recoger mis papeles y dejar en orden los que pertenecían al servicio oficial del ministerio. Di instrucciones diversas al personal. Recibí la visita del duque de Tovar y de algunos periodis-

tas. A las cuatro de la tarde tomaba mi automóvil particular en unión de mi familia, para no usar el oficial, abandonado, según mi costumbre de siempre, en el momento mismo de presentar mi dimisión. La tarde era espléndida, y la concurrencia en la carretera numerosa. Cambiamos muchos adioses. El coche de la Policía a mi servicio me seguía aún. Así llegamos a Behovia. Nadie nos detuvo. La Guardia Civil a caballo, al reconocerme, me hizo lenta y solemnemente el saludo reglamentario, como despidiéndome en las lindes de la patria. Al otro lado allá del Bidasoa se divisaba la Aduana de la República. Pasamos el puente. Nunca me ha parecido tan bella, tan sonriente, tan acogedora, esta tierra de Francia... Aquí encontraba incólumes y activos el Derecho y la Libertad. En mi patria sonaban ya los clarines y brillaban las bayonetas proclamando en calles y plazas "el pronunciamiento", como en los peores días de la pasada centuria... España, políticamente, había retrocedido un siglo.



Residencia
de Estudiantes



Residencia
de Estudiantes



Residencia
de Estudiantes



Residencia
de Estudiantes



Residencia
de Estudiantes



Residencia
de Estudiantes



Residencia
de Estudiantes



Residencia
de Estudiantes



Residencia
de Estudiantes

EL EJERCITO Y LA DICTADURA

El observador extranjero cuidará de no incurrir en el error de interpretar el hecho de la Dictadura española por las causas a las que vulgarmente se imputa en los últimos años el resurgimiento de diferentes dictaduras en el mundo. Las mismas que sutilmente estudia con carácter general en su interesante libro don Francisco Cambó, sin que dejaran más o menos de existir en España, tuvieron, a mi juicio, escasa relación directa con el pronunciamiento del 13 de septiembre de 1923. Hay que buscar su génesis principalmente en factores que también el señor Cambó enuncia, peculiares a nuestro país, y en aquellos otros de índole personal referidos a la individualidad de quien dirigió el suceso desde la Capitanía general de Barcelona y presidió después, durante más de seis años, el Gobierno de la Dictadura.

Primo de Rivera y Mussolini.

Por lo mismo, sin extenderme en análisis, harto conocidos, de la psicología española en la vida pública, y sin generalizar tampoco acerca de la crisis universal de los Poderes después de la Gran Guerra, me limito a afirmar categóricamente que no hay la menor relación, por ejemplo—ya que él es el que más generalmente se ha mostrado a los españoles en los últimos años y el que justamente destaca en la vida europea—, entre el caso Mussolini y el caso Primo de Rivera. Singularmente autorizada es la opinión de mi ilustre amigo el ex jefe del Gobierno italiano, el señor Nitti, cuando escribe en su libro "Bolchevisme, fascisme et democratie" (París, 1926): "La Dictadura española es poco interesante, no sólo históricamente, sino también estéticamente... El general Primo de Rivera no es un tipo nuevo. Es uno de los numerosos generales de las Repúblicas de América Central. En efecto, ningún principio político, y menos todavía nin-

guna idea moral, ha presidido la pequeña crisis española, crisis en la cual el régimen constitucional ha sucumbido. Es probable que dentro de poco otro golpe de Estado militar reintegre, al menos en cierta medida, el orden y la libertad."

Muerto Primo de Rivera, no he de ahondar, por motivos de delicadeza y de piedad, en los rasgos determinantes de la gran diferencia que existe entre su figura y la eminente—aunque poco grata para nosotros los hombres de izquierda, demócratas y pacifistas—de Mussolini. El gracejo español la subrayó bien pronto, desde los primeros días de la Dictadura, con una frase que se hizo popularísima. Pero bastará recordar que el movimiento fascista no se empolló en el Poder, como las Uniones Patrióticas en España. Fué anterior a él en varios años, y la marcha sobre Roma, el coronamiento de una acción política intensa y pública del actual "duce" y de sus camisas negras. Mussolini no sólo no utilizó para nada el Ejército, sino que cuidadosamente se apartó de cuanto pudiera parecer una intervención de la fuerza militar en las contiendas políticas. Reiterada y solemnemente ha mantenido esta separación, aprovechando cuantas ocasiones se le han presentado para recordarla y proseguirla. "Si el Ejército ha de pelear algún día por la patria—ha dicho Mussolini—, es preciso que ningún italiano vea entonces en sus generales, en sus oficiales y en sus soldados un recuerdo de persecución política, y que todos los hijos de la gran Italia se congreguen sin rencor y sin esfuerzo bajo las banderas al viento que sólo así llevan los pueblos a la victoria."

Hablar y proceder de tal modo es cosa bien distinta de conspirar con la guarnición de Barcelona, que el Gobierno y el país habían puesto en manos del general Primo de Rivera en una función de confianza; apelar en su manifiesto a "la casta militar"; nombrar en seguida un Directorio de generales; y desparramar por el país más tarde toda una red de delegados llamados gubernativos, jefes y oficiales del Ejército, encargados de actuar en la vida administrativa y política hasta de las más pequeñas localidades... Por fortuna, no todo el Ejército pensaba y obraba como el dictador. Y el pueblo ha sabido distinguir también entre éste y "los soldados de España", evitando así el divorcio catastrófico entre la nación y sus tropas, que de otro modo se habría producido.

La interesada fantasía de la Prensa extranjera.

El lector no español corre gran riesgo de equivocarse si se atiene a informaciones de las que en los últimos años se han leído acerca de España en la Prensa de Europa y América. Dejemos a un lado el desconocimiento que suele en ella existir acerca de la vida española, viéndonos exclusivamente por el lado pintoresco, "país de la pandereta", que en muchos extranjeros halla una sonrisa de comprensión y hasta de regocijo para actos y procedimientos que jamás toleraría cada uno de aquéllos en su propio pueblo. El Gobierno de

la Dictadura ha gastado sumas fantásticas en corromper periódicos y periodistas o en conquistar el silencio de los que por su matiz político se habrían hecho sospechosos con un elogio de la Dictadura en columnas habitualmente consagradas a la defensa de ideas radicales. Tal ignorancia o deformación de las cosas de España ha revestido alguna vez caracteres sencillamente escandalosos o ridículos. Así, por ejemplo también, una gran parte de la Prensa, en los primeros días de la tiranía, hacía de ella y de su principal protagonista, sin proponérselo, la crítica más cruel publicando el retrato y la biografía del difunto general don Fernando Primo de Rivera, tío y protector del dictador de España, como si fueran los de éste. ¡Y el hecho se repetía aún al acontecer su muerte en diarios que, por lo demás, presumían de conocer muy bien nuestro país... al través de las notas que recibían y cobraban!

La responsabilidad del generalato en la política nacional.

Recordemos la tradición intervencionista de los generales en la política nacional, más o menos intensa y visible, según hombres y momentos, pero siempre tenaz y por muchos de ellos bien aprovechada. No cometo injusticia alguna afirmando que de todos los órdenes o sectores de la vida del Estado español, ninguno tenía menos derecho que el generalato, que Primo de Rivera, antiguo senador conservador, personificó y quiso representar, para ofrecerse a la opinión de España y del mundo con gesto de desinteresado regenerador, extraño a las impurezas y a los fracasos de Gobiernos y partidos. Lo habían ya entendido así, por cierto, las famosas Juntas de Defensa militares en los comienzos de su actuación, cuando ásperamente rechazaron el ofrecimiento del mismo Primo de Rivera a colaborar en ellas. Pero lo proclama también la Historia, en la que la actuación de los generales políticos ha sido precisamente una de las calamidades de nuestra vida pública, que ha perturbado muchas veces el ritmo normal de partidos e instituciones; ha obligado al Tesoro a gastos militares desproporcionados para la capacidad económica de España, sin lograr tampoco la eficiencia militar apetecida ni la satisfacción interior de la oficialidad; ha desviado el curso y la eficacia de corrientes de la opinión ciudadana, que podrían haber sido salvadoras en algunos instantes; y ha retrasado, en suma, el momento de plenitud de la capacidad política del pueblo, confiando a veces en la intervención providencial y maravillosa de "el hombre del milagro"; milagro que cada español ha de realizar por sí mismo en vez de confiarlo a falsos mesías de ninguna especie.

La historia del reinado de Isabel II es el juego de una baraja de generales afortunados, que pelean con valor en las guerras civiles, rivalizan en los cuarteles y determinan las crisis en los rigodones de Palacio. Narváez y O'Donnell, las grandes figuras ejes de la vida nacional. Después, en el período revolucionario, Serrano y Prim. La Restauración viene traída por la espada de Martínez Campos, aun-

que su patriotismo sincero y su modestia dejen el campo libre a don Antonio Cánovas para que el genio político de éste realice la obra pacificadora. Pero la influencia del general de Sagunto vive perenne hasta su muerte, realizando a veces funciones decisivas de árbitro de la política, como su famosa crisis de "la corazonada", que disuelve el Parlamento largo poco antes de expirar su vida legal y lleva al Poder a los conservadores. Cánovas y Sagasta difícilmente logran contener en la sombra la actuación de los generales, siempre amablemente acogidos y más de una vez estimulados o amparados en la cámara regia. Se suceden episodios, al través de los años, en el fondo idénticos, como el disentiimiento entre los mismos Martínez Campos y Cánovas, la carta del general Dabán, el relevo de Cassola, la llegada triunfal de Polavieja... Gobiernan, en suma, los generales en Madrid tanto como los ministerios de la "Gaceta". Mucho más que ellos, en las colonias, donde los capitanes generales de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, son verdaderos vicerreyes, principales responsables de la política que preparó la catástrofe del 98...

En el reinado de Don Alfonso XIII la situación no cambia. El Trono y los partidos siguen mimando a los generales. No presiden Gobiernos sino accidentalmente, como el benemérito Azcárraga. Pero su influencia es decisiva. Hasta los partidos revolucionarios viven muchos años pendientes del gesto de los caudillos militares, explorando su bueno o su mal humor, como signo de desilusión o de esperanza política. He sido ministro nueve veces. He vivido intensamente la vida pública desde antes de la jura de Don Alfonso XIII. No recuerdo que un Gobierno ni un Parlamento hayan rechazado jamás una propuesta o una petición de un ministro de la Guerra. Los huéspedes del Palacio de Buenavista, con rarísimas excepciones en los años últimos, han sido siempre generales. La participación de éstos en la acción política y gubernamental en el llamado viejo régimen es, por lo menos, igual a la de los hombres civiles. Las Juntas militares de defensa así lo proclamaban, excluyendo a aquéllos de sus funciones directivas. ¿Qué agravio inferido, qué reforma salvadora rechazada, podían alegar los generales como motivo o siquiera pretexto para presentarse a título de salvadores, en 1923, con Primo de Rivera? No pudo citarse ni uno. El manifiesto de septiembre los omite, limitándose a recoger, con mediana sintaxis y peor intención, unas cuantas vagas fórmulas del arbitrio de café. El problema de Marruecos había sido también principalmente regido por generales, ya que la Alta Comisaría, militar hasta noviembre de 1922, en ellos estuvo vinculada, como la dirección de la campaña.

El rescate de los prisioneros de Abd-el-Krim. Una carta de Primo de Rivera.

Atengámonos, pues, a la explicación ocasional de sus actos, que el propio ex dictador divulgó en los artículos de "La Nación", y analicémosla aportando a la conciencia universal otros elementos de jui-

cio. Entre ellos destaca el relativo a la campaña que tenazmente se hizo entre el Ejército de Africa y en el mismo de la Península contra el entonces ministro de Estado, singularmente a partir del rescate de los prisioneros de Abd-el-Krim, presentando este hecho, pasada la primera impresión sentimental, como un acto atentatorio a la dignidad del uniforme. Se omitía o se olvidaba para ello que en los archivos de la Alta Comisaría y en los ministerios de la Guerra y de Estado, existe documentación abundante, acreditativa de las gestiones infructuosas realizadas por delegados militares, y por orden de autoridades militares también, cerca de los rebeldes. Se omitía o se olvidaba igualmente que mis iniciativas estuvieron siempre secundadas, estimuladas, requeridas—salvo en el acto concreto del rescate, confiado, por su propia naturaleza, a elementos civiles como el señor Echevarrieta, el cónsul López Ferrer y el malogrado Dris-ben-Said, fiel amigo de España—, por militares y sus familias. En todo caso, existen un testimonio y una opinión que lícitamente no podían invocarse contra la política seguida al producirse el golpe de Estado y la campaña de escándalo que le antecedió, le acompañó y le siguió. El testimonio y la opinión excluidos son los del propio general Primo de Rivera.

En efecto: entre los papeles que guardo en París y que pudieron milagrosamente escapar a los registros violentos de la Policía en mi casa de Madrid—acaso inspirados en el propósito de rescatar este y otros elementos de prueba semejantes—se encuentra una carta autógrafa de don Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, al entonces ministro de Estado, hoy autor del presente artículo, que copio textual: “Hay un membrete que dice: El capitán general de la cuarta región. Barcelona, 1-2-923. Excelentísimo señor don S. Alba, ministro de Estado. Mi querido amigo: Aunque, como ha dicho usted muy bien, no sea caso de apoteosis ni de extraordinario regocijo, lo es sin duda de congratularse por habernos aliviado de la pesadumbre que representaba tener cautivos a unos españoles *sin la esperanza de liberarlos por medio mejor que el empleado* y con temor de que se fueran extinguiendo. Dios quiera que este episodio de la desatinada empresa africana sea el último que nos duela y nos humille. Mucho sentí no verlo a usted en Madrid en los dos días que lo intenté a mi regreso de Jerez (el general era entonces cordial amigo mío, me visitaba con relativa frecuencia y solíamos comer juntos alguna vez, sin que yo haya sabido nunca concretamente el motivo de su frenética hostilidad, posterior a las elecciones generales en mayo); pero me era ya imposible prorrogar mi ausencia de aquí. Reciban, pues, el Gobierno, y usted muy particularmente, *la felicitación que merecen por haber resuelto esta cuestión*, y disponga de su afectísimo amigo, q. e. s. m.—Firmado, Miguel Primo de Rivera.”

Omito comentarios, fiel a la regla que anuncié en mi primer artículo. No trato de defenderme, sino de analizar una política. Reproduciré solamente el escuchado a muchos militares con mayor viveza que la que yo pongo en estas líneas serenas. Es extraño que tanta severidad se aplicara a un hombre civil, hasta por su cargo na-

turalmente propenso a la pacífica actuación de la diplomacia, sin desdoro suyo, ni del Ejército, ni de nadie, y en cambio los generales mismos del Directorio no hayan repugnado confiar mandos militares y cargos relevantes a alguno de los rescatados. En otros pueblos, la desgracia militar merece respeto, pero no se exhibe ni se recompensa.

La acción militar de España en Africa.

Por lo demás, la acción bélica en Africa del Gobierno de la Dictadura no se distinguió gran cosa, en los primeros tiempos, de la desarrollada bajo los Gobiernos anteriores sino por el indiscreto anuncio público de un próximo abandono de posiciones, hecho por el dictador, que permitió a los rebeldes prepararse adecuadamente y crear una situación militar dificilísima, que llegó hasta a amenazar la pérdida de Tetuán. La evacuación de los puestos del valle del Lau y la retirada de Xauen fueron operaciones penosas y sangrientas como la que más en tiempos anteriores. Excedió de diez mil el número de bajas que padecemos, aunque generales, jefes, oficiales y tropas rivalizaron en heroicos esfuerzos y en admirable espíritu.

Había yo defendido siempre, en el Gobierno y fuera de él, desde la primera declaración del Gabinete, la necesidad de concertar con Francia un acuerdo que permitiera en Africa una acción común y decisiva de ambas potencias, ya que a ambas también se halla confiada la misión protectora de Marruecos. No eran precisamente algunos elementos militares, afectos después al general Primo de Rivera, muy entusiastas de ella. Justo es reconocer que tropezaba también con la resistencia, mejor o peor disimulada, del propio mariscal Lyautey, quien acaso confiaba en el fracaso definitivo de España para redondear y completar sin esfuerzo la zona francesa, en la que tan gloriosa y fecunda labor, de político constructivo tanto o más que de caudillo militar, ha realizado. Toda una documentación relativa al asunto y un plan escrito halló sin duda el general Primo de Rivera entre mis papeles personales, en mi mesa de trabajo del ministerio, cuando dos años más tarde mi amigo M. Malvy llegó a Madrid en misión especial, al surgir en Francia la pesadilla de Abd-el-Krim, que España venía padeciendo sola. No cometo la necedad de decir que lo hecho fuera una ejecución simple de aquel plan. Sí afirmo que pudo ser su prefacio y que, sin ruido y sin alardes, con el pensamiento puesto exclusivamente en España, yo utilicé también mis medios personales en París, cerca especialmente del Gobierno Painlevé, para cooperar a esa política de acuerdo, que Francia aprovechó al fin tanto como nosotros.

El desembarco en Alhucemas.

Ningún hombre civil hubiérase lanzado en otro tiempo a la operación sobre Alhucemas sin tal concierto y frente al dictamen, categóricamente opuesto a ella, de los Estados Mayores de Guerra y de Ma-

rina. Las circunstancias, más que el esfuerzo de los hombres, modificaron el problema, dándole una visión internacional y de cooperación conjunta que debió haber tenido siempre, en la política como en las armas. La insensata vanidad de Abd-el-Krim facilitó lo que la diplomacia había resistido tantos años. Y el valor, la abnegación y el ímpetu de los soldados de España completaron la obra, desalojando a los rebeldes de posiciones en que se creían inexpugnables. El bárbaro sacrificio de los oficiales españoles, cometido por el cabecilla montaraz en vísperas de entregarse a Francia, es la prueba más horriblemente incontestable de lo que habría sido del centenar largo de cautivos que yo rescaté, si hubiéramos confiado sólo en la fuerza para redimirlos.

Triunfante en la operación de desembarco en Alhucemas y las que le siguieron, no he de incurrir yo en la pueril vulgaridad de regatear su éxito al general Primo de Rivera dedicándole a analizar lo que hubo en aquél de previsión calculadora, lo que se ganó por el esfuerzo de sus colaboradores y lo que le entregó complaciente su propia suerte. Todo ello se cotiza siempre para el vencedor, en la guerra como en la política, y entrar en semejantes disquisiciones sería restar autoridad a estos artículos, en los que no sirvo sino la verdad, y el interés de España. "En el fondo, todo se encadena por una mano invisible. Yo no he llegado a ser grande sino por mi estrella", escribía Napoleón. Bien podía, sin violencia, repetirlo el que se llamó a sí mismo "su compañero de armas". Y en reconocerlo no habría tampoco agravio para su memoria.

Ahora bien: faltaron al dictador español grandeza moral y visión elevada para actuar después de la victoria, desde el Gobierno de España. Señala tal instante, por frecuente paradoja en el destino de los grandes afortunados, el comienzo de su decadencia y la iniciación de su caída. Primo de Rivera, colocándose entonces a la cabeza del país, de "todo el país"; preparando diligentemente su inmediata salida del Gobierno; procurando la reparación a los elementos políticos e intelectuales, injustamente agraviados y perseguidos; iniciando con templanza y con generosidad la pacificación de los espíritus; dirigiendo la comunión cordial del Ejército y del pueblo; abriendo el acceso al Poder a personas más capacitadas que él para las funciones directivas en la paz; "haciéndose perdonar" su audacia y su fortuna misma..., habría sido desde entonces, sin duda alguna, a poco que supiera luego guardar su posición, una gran figura nacional. En vez de realizarlo así, oyó, como tantos otros hombres de suerte, el lenguaje interesado de los parásitos y de los aduladores e intentó el imposible físico y moral de convertir en permanente una función que había de ser transitoria, por la propia naturaleza de la Dictadura y por la misma condición del dictador.

La "depuración" del Ejército.

En pocos aspectos de la actuación ministerial se acreditó tanto su error como en el importantísimo de la vida del Ejército, que prefe-

rentemente le incumbía. Afanoso de garantizar su mando mediante el concurso resuelto e incondicional de elementos militares que le fueran devotos, se crea precisamente entonces una labor odiosa de clasificación y "depuración" del Ejército. Las famosas fichas que hicieron tristemente célebre al general francés André, ministro de la Guerra, actúan, reproducidas, en España. Entréganse los mandos de Cuerpo a los más afectos, no a los más capaces. La desconfianza y la soplonería ganan los espíritus débiles. La mitad del Ejército recela de la otra media. La negativa de los artilleros a otorgar al dictador el título de coronel honorario cáusale una herida de amor propio que ya no se cerrará nunca y que se envenenará indefinidamente. Prodiganse empleos y recompensas, en cifras que dejan atrás las de la Gran Guerra. Trastórnanse los sistemas de ascenso, alteranse las plantillas, llévanse a todas las Armas y a todos los Cuerpos las disposiciones más absurdas. Surgen, escandalosas, las historias de prebendas múltiples, militares y civiles, en favor de la clientela presidencial. Se vive en pleno favoritismo, en descarado pandillaje. Para los pretorianos no hay freno ni hay medida. A cada queja o a cada denuncia se aprietan un poco más los tornillos, y... ¡a vivir! Los que murmuran "no son buenos patriotas", sino gentes discolas, fracasados e impotentes, a quienes hay que eliminar.

Generosidad, impotencia y crueldad.

El Ejército, en general, se siente desasegado, entristecido, sin ilusión y sin contento interior. Llegan a él las ansias liberadoras de la opinión civil. Descúbreanse las conspiraciones, una tras otra, en condiciones tales, que el Poder ha de mostrarse clemente ante ellas, no por generosidad, sino por impotencia. Se incurre en la enormidad de adicionar a las penas militares la de las multas extralegales, que han de pagar generales y jefes sin tener presente su historia de armas, sino su peculio particular. Surgen, repetidos, los conflictos con la Artillería, núcleo tradicionalmente monárquico, católico y gubernamental. Se producen primero las prisiones de Madrid y Barcelona, que retienen largo tiempo al general López Ochoa, a los hermanos Sosa, al coronel laureado don Segundo García y a distinguidos jefes y oficiales, entre ellos mi inolvidable amigo el comandante Peñalosa, héroe de Africa, muerto ha poco a consecuencia de la prisión, *incomunicado durante más de un mes*, que hubo de sufrir. Viene después la noche de San Juan, que lleva al castillo de Cádiz al bizarro general Aguilera, y a Montjuich, a diferentes jefes y oficiales, alguno de los cuales muere también allí. Estallan, en fin, la sublevación de Ciudad Real y los sucesos de Valencia, tan recientes que excusan todo recordatorio... El dictador apela repetidamente a exhortar a los soldados a que no obedezcan a sus jefes. Las proclamas lanzadas por avión en Ciudad Real llegan a autorizar la agresión contra los mismos.

¿Qué es todo ello sino un principio de anarquía y la destrucción

de la disciplina, esencial en la vida militar, aun en el Ejército rojo? ¿Quién puede calcular el estrago y las consecuencias futuras de semejante situación de los institutos armados? ¿Cómo ha de estar el remedio en el licenciamiento de los soldados, a que frecuentemente apeló el dictador; ni en retirar de los Cuerpos municiones y elementos de guerra, según también se practicó en su tiempo; ni en utilizar la Guardia Civil para arrestar generales, jefes y oficiales y rodear cuarteles, como entonces se hizo; ni menos aún en emplear la Policía para funciones de espionaje militar y aun de coacción efectiva contra beneméritos soldados de la nación? ¡Y cuán lejos no está todo ello, rigurosamente cierto y aun pálidamente reflejado en las presentes cuartillas, de los ditirambos y de los "autobombos" respecto a su política militar contenidos en los cuatro artículos publicados por el general Primo de Rivera en "La Nación"!

El triste legado militar de la Dictadura.

Apartemos la mirada con tristeza de este espectáculo, que constituye el legado militar de la Dictadura, precisamente de un Gobierno que había venido a actuar para la redención del país, en nombre del Ejército. Jamás en la historia, desde Roma acá, dieron otro fruto los Gobiernos pretorianos. Al propio Ejército español incumbe antes que a nadie reaccionar contra tal situación. Yo estoy seguro de que así lo hará. Las discretas medidas de reparación adoptadas por el Gobierno del general Berenguer abren también el pecho a la esperanza. Quiero creer que generales, jefes y oficiales de mi patria, sienten más aún que yo mismo el rubor del pasado y se aprestan a que no sea *nunca más* nuestra España el pueblo que dió al diccionario universal la palabra "pronunciamiento".

El Ejército de un Estado moderno no ha de ser sino la nación misma en armas, instrumento de justicia, garantía de libertad, afirmación del decoro y de la independencia colectiva ante el mundo, extraño a las contiendas de la política, por justificada que en un momento le parezca su intervención en ellas. Los grandes pueblos victoriosos, como Inglaterra y Francia, no han visto a sus generales incurrir en el caudillaje ni aun para regir desde el Gobierno la liquidación de la guerra, en tantos aspectos ligada al espíritu y al porvenir del Ejército; menos aún para señalar predilecciones ni trazar vetos en política. En el gran pueblo vencido, Alemania, el Ejército ha sufrido paciente la destrucción de los instrumentos de guerra y la eliminación de millares de sus oficiales, consagrados hoy a industrias pacíficas y a negocios comerciales. Hindenburg, el viejo y glorioso soldado del Imperio, rige con lealtad acrisolada la República, por el voto de sus conciudadanos, no por el ímpetu de los soldados que en otro tiempo le adoraban... Ni la victoria ni el vencimiento desvían ya en las democracias europeas el curso normal de la política, la efectividad del Derecho, el imperio de la ley, la expresión del sufragio popular en las urnas y en el Parlamento, sea ella la que sea. No hablemos

de la gran República del Norte de América, donde la mentalidad de millones de ciudadanos no concibe siquiera la hipótesis cesarista dentro de un régimen, democrático, sí, pero de orden y de respeto férreo a la autoridad...

Pasada la tormenta, dialoguemos sin rencor militares y paisanos. Pensemos en España exclusivamente, en la necesidad y en los medios de reconstituirla. Aquellos que visten uniforme han de permitirme que yo les muestre una ruta gloriosa: la de Foch, el vencedor de la Gran Guerra, militar insigne, tanto como ciudadano esclarecido. De él escribe el comandante Bugnet, de su Estado Mayor ("En ecoutant le maréchal Foch", París, 1929), las ejemplares líneas con que cierro este artículo: "Como aquellos que en otros tiempos, después de su triunfo, depositaban sus armas ante el altar de la patria y volvían a ser no más que ciudadanos, el mariscal, jefe del más formidable ejército que un hombre haya mandado nunca, vino sencillamente a dar cuenta y a pedir órdenes. "Los Gobiernos aliados—dijo Foch—me habían confiado sus ejércitos. Con ellos les he traído la victoria. He cumplido la orden recibida. No era fácil; pero he podido ejecutarla. La misión está realizada. Vuelvo a las filas. Ahora, que cada cual haga bien lo que tiene que hacer. Así, las cosas marcharán perfectamente. Pero si cada uno quiere desempeñar el oficio del vecino, todo acabará en el caos."

LA VIDA CIVIL BAJO LA DICTADURA

Atribuye en sus artículos el general Primo de Rivera una gran importancia al catalanismo, señalando sus excesos como causa específicamente determinada, entre muy pocas más, del pronunciamiento. Dedicó en sus escritos al problema catalán, en relación con la obra del Gobierno de la Dictadura, muy destacada atención. Consagremos también en éstos a tal tema la que merece, siquiera vayamos cada vez más tropezando con los límites del espacio periodístico para reflejar fielmente una síntesis de la vida española, tan azarosa y tan compleja, en muy diferentes aspectos, durante aquel período.

Primo de Rivera y los catalanistas antes y después del 13 de septiembre.

Digamos ante todo que es cuando menos extraño que el general escriba textualmente: "No fué en Cataluña, con ser tan grave lo del terrorismo, lo que más me preocupó a poco de estar allí. Fué el separatismo, que, enmascarado de autonomía moderada, autonomía ge-tegral, solidaridad catalana y otros disfraces, iba engendrando contra el resto de España y contra la unidad de la patria despegos y rencores..." La afirmación que contienen y el estado de espíritu que pretenden mostrar los anteriores renglones y tantos otros de los artículos del ex dictador, se compadecen muy mal con las actitudes, las palabras y los ofrecimientos del general Primo de Rivera a los catalanistas en vísperas de su pronunciamiento. En efecto, no es un secreto para nadie que el capitán general de Cataluña solicitó entonces insistentemente a los prohombres del regionalismo y dejó deslizar en sus oídos halagadoras promesas. Ellas más que nada explican la delirante apoteosis con que fué despedido en la estación de Barcelona al partir para la corte llamado por el Rey. No llego yo tan lejos como algunos informadores que en estos días, desde periódicos respetables

de Barcelona, han afirmado que Primo de Rivera pensó ampararse en los Somatenes de Cataluña para resistir, si el Gobierno constitucional intentaba apoderarse de su persona al encontrarse él aislado del Ejército, que le mostró bastante desvío en las veinticuatro horas siguientes al pronunciamiento. Pero bastan a robustecer la afirmación que dejo escrita, no ya los informes particulares que he recogido durante mis años de emigración de las personas más calificadas en el movimiento catalán, sino los artículos de carácter histórico que recientemente ha publicado con su firma en "La Veu de Catalunya" de 27 de febrero y días sucesivos el ex presidente de la disuelta Mancomunidad, señor Puig y Cadafalch. Es imposible reflejarlos aquí ni sumariamente. Son seis y bastante extensos. Remito a ellos al lector que quiera constatar la veracidad de mi aserto. Bastará reproducir extractadas algunas de sus afirmaciones, que el señor Puig y Cadafalch acompaña de copiosa documentación:

"El general—escribe—no perdía ocasión de halagar lo que más estimamos mostrando su simpatía por la lengua catalana... Veía claro el momento. Cada día, los hechos, el ambiente, todo cuanto le rodeaba, le sugería la dictadura. De su boca salían a menudo, en momentos de expansión, el designio y el propósito... Dirigió al pueblo una alocución que durante todo el tiempo de su gobierno posterior la Censura nos ha impedido siempre reproducir. Su pensamiento está explicado en unas declaraciones publicadas al día siguiente en "El Día Gráfico" (son curiosas, sobre todo para contrastarlas con lo que dijo, hizo y dejó de hacer después). "Haremos—habla Primo de Rivera—una nueva división administrativa, gubernativa y judicial, y aun posiblemente militar, de España..., *tendiendo a crear la región robusta y con medios propios*... En cuanto a los idiomas regionales, no los perseguiremos, porque tienen tradición, amor y belleza... He tomado tal amor a Cataluña, que lo que más anhelo es servirla."

El señor Puig reproduce también textualmente una nota de que fué portador el señor barón de Güell el día de la ruidosa inauguración de la Exposición del Mueble, en cuyo acto el general se mostró, realizado ya el pronunciamiento, en franca conexión con los catalanistas. La nota es extensa. Refleja las ideas, conocidas, del señor Puig y Cadafalch. "El general—dice—recibió la nota con un entusiasmo que a mí me pareció fuera de medida." "Este—manifestó el general—*será el programa que voy a presentar al Rey. Será para mí el mayor honor de mi vida dar satisfacción a los anhelos de este pueblo, al que tanto debo.*" Rogó sólo que se suprimieran dos palabras en las que se aludía a las regiones llamándoles naciones. "No por mí, sino por el medio en que deberé actuar", añadió. De la conferencia daba a la Prensa inmediatamente una nota oficiosa, visada por la Censura, que ya había comenzado a funcionar en las Capitanías generales. A ella pertenece el siguiente párrafo: "El general se ha ratificado en el propósito de dedicar su actividad a la resolución del problema interno de España dando a las regiones toda la fuerza y toda la libertad compatibles con la existencia de una unidad estatal."

(El pensamiento y el léxico eran, como se ve, los mismos de todos los documentos catalanistas.) “El general—escribe el señor Puig—, al cabo de una hora, salía entre los aplausos entusiásticos de Barcelona. Yo, mientras tanto, hacía guardar en lugar seguro mi archivo particular de presidente de la Mancomunidad.” ¡Cuatro días después, y el general, ya en Madrid y en la jefatura del Gobierno, se publicaba en la “Gaceta” el famoso decreto de 18 de septiembre de 1923, creando un delito especial—no se reputaba suficiente la dura ley de Jurisdicciones—para las propagandas catalanistas y sometiéndolas al Consejo de guerra!

Desde entonces se acentúa—¡es natural!—el divorcio entre el general “pronunciado” en Barcelona y los que habían sido tan cordiales amigos y aun colaboradores suyos. Es muy interesante y pintoresca la escena de la sobremesa en el banquete celebrado a la vuelta del viaje regio a Italia. El Rey brinda en voz baja: “¡Visca Catalunya!”. El presidente de la Mancomunidad tiene a su lado al cardenal arzobispo de Tarragona. Pretenden explicarse ambos con el dictador; pero éste nos les deja, habla sin cesar, hace “afirmaciones fantásticas”. “Un taquígrafo—añade el señor Puig—hubiera podido escribir una página que sería como el programa de la persecución de Cataluña después desarrollado... Yo procuro dominar mis nervios, imitando los moderados gestos cardenalicios, de los cuales tenía delante un modelo en su eminencia el cardenal de Tarragona; quien, vivo, ha sufrido un martirio incruento, repitiendo los gestos heroicos de su predecesor San Fructuoso.” ¡Bella estampa en colores de la España de la Dictadura!, digo a mi vez.

¿Para qué seguir? La persecución es tenaz y rica en incidentes, hasta que se llega a la disolución, por decreto, de la Mancomunidad. Su antiguo presidente la registra con un severo comentario, que no es sino ratificación de la tesis con que encabezamos estos renglones: “La vieja moral—dice, entre otras frases vivísimas—está llena de la idea del deber, de la fidelidad a la palabra empeñada. El perjurio, el apóstata, el traidor, muchas veces la estafa—la serie se alarga en matices diversos—, en todos los Códigos penales del mundo, no son sino pobre gente que ha faltado a una cosa tan débil como la palabra dada. El general venció fácilmente estos crepúsculos de régimen antiguo, vivos sobre todo entre la gente honrada del mundo civil, y se desprendió de ellos en una nota, donde se establecía una nueva moral: el derecho de faltar a las promesas hechas solemnemente a un pueblo al cual se acogió para conseguir el impulso soberano que lo llevó a la Dictadura.”

Los colaboradores del dictador. El problema catalán.

Tal es también, desde hace mucho tiempo, mi arraigado convencimiento. El suceso de Barcelona no hubiera sido ni posible siquiera en otra ciudad española y en un ambiente distinto. Los grandes “animadores” del general sublevado fueron ciertos hombres del catala-

nismo—el señor Cambó ha declarado que no se hallaban entre ellos ni él ni sus más significados colaboradores en el Parlamento—, los mismos que en el Palacio de la Generalitat, al día siguiente del golpe de Estado, miraban el reloj y decían con magnífica indiferencia: “Las once y cuarto... ¿Habrán ya matado a Alba?” Estaban sin duda en muchos secretos. Pero no habían descifrado el de su propio e inmediato porvenir. Más previsores eran los diputados de Acción Catalana, que el 5 de octubre (1923) dirigíanse a su presidente protestando contra todo contacto y “acatamiento a las nuevas autoridades españolas salidas del pronunciamiento del 13 de septiembre.”

Y, sin embargo, no cabe confundir, no confundiré yo nunca, errores y apasionamientos como los enunciados, con el deber ineludible de acudir ahora a la solución del problema catalán y procurar la incorporación efusiva de aquella hermosa región de España a la obra total de reconstitución moral y política de la patria, después de los seis años indignos. Un gobernante tiene el derecho, y muchas veces la obligación, dolorosa, pero inexcusable, de oponerse a movimientos populares si los cree equivocados o dañosos para el interés colectivo que le ha sido confiado. Lo que no es lícito, en la vida pública menos aún que en la privada, es burlar y defraudar aspiraciones que se han estimulado y enardecido como medios poderosos para trepar hasta la primera columna de la “Gaceta”.

El problema de Cataluña está hoy irritado y envenenado más, mucho más, que cuando el general Primo de Rivera salió triunfante de Barcelona, camino de Madrid y de la Presidencia del Consejo. Su política de persecución en el antiguo principado es una de las máximas responsabilidades de la Dictadura. El movimiento de aproximación que señala el reciente viaje de los intelectuales de Castilla a Barcelona debe ser mantenido, amplificado, encauzado por cuantos hombres públicos aspiren, sin pasión y sin resquemores, que yo no siento, a esa política de pacificación y de coordinación nacional que es el primer imperativo de los actuales días en España.

No se olvidó de ella menos el general cuando, en vísperas del pronunciamiento, y más tarde en sus primeras conversaciones con la Prensa de Madrid, deslizó la especie de que era inexcusable la denuncia de los Tratados en vigor con la Gran Bretaña y con Francia, campaña igualmente mantenida en los meses anteriores al golpe de Estado por ciertos industriales catalanes, camaradés del capitán general de Barcelona en sus tertulias íntimas. Llegó a decir que las concesiones hechas por bajo de la segunda columna del Arancel bastarían a justificar por sí solas la caída violenta del Gobierno constitucional. El dictador no había, sin duda, tenido tiempo de enterarse bien de las cifras y de la naturaleza de tales Pactos, ni de los términos de la ley Arancelaria vigente. Y hablaba con su habitual arrojo para la improvisación, de materias totalmente extrañas a sus conocimientos. Las realidades de gobierno y una meditación más tranquila le apercibieron bien pronto de su error. No denunció los Tratados inglés y francés. Otorgó, sí, concesiones que antes no se habían dispensado a las Compañías y a los intereses extranjeros. Y en las Con-

venciones con Italia, Alemania y los Estados Unidos aun fué más allá de las notas de negociación que yo había dejado en el ministerio de Estado. ¡Ah, el terrible achaque de decir o hacer las cosas y pensarlas después! Deberían todos los hombres que con la política rozan, mucho más si en ella actúan, tener siempre a mano el sentencioso Gracián. Hubiéralo hecho así el general dictador y no olvidara nunca sus sabias palabras: "La detención sazona los aciertos y madura los secretos; que la aceleración siempre pare hijos abortivos, sin vida de inmortalidad. Hase de pensar despacio y ejecutar de presto."

Gibraltar y Tánger.

Padecióse muchas veces el sistema contrario hasta en la política exterior. Así, en los primeros meses de la Dictadura, la alegre desenvoltura de su presidente creónos una difícil situación con la Gran Bretaña, al evocar nada menos que el problema de Gibraltar y la posibilidad de su permuta por Ceuta. Era ya en él ésta una idea antigua, que nunca cuidóse de exponer con cierta preocupación de lugar y de tiempo, contra el consejo del clásico, y por ello sin duda no se recató tampoco de comunicarla a los periodistas en la Presidencia del Consejo, antes siquiera de transmitirla a los embajadores, con los apetecibles miramientos. No influyó poco en la actitud de Inglaterra respecto a la cuestión de Tánger. La crítica minuciosa de lo pactado en la primera conferencia tripartita (diciembre de 1923) y su relación con las peticiones de España en la que nuestra nación misma provocó, dos años más tarde, por el órgano del Gobierno que había suscrito el Acuerdo anterior, sería larga y es posible que inconveniente para el interés de mi país. Callo, pues, y me limito a insinuar el tema. Afirmino solamente que el resultado de tanto ruido como en España procuróse despertar en torno de las negociaciones sobre Tánger, hablando del "Tánger español" y de las reivindicaciones históricas que habíamos de mantener, sucediera lo que sucediera, fué poco menos que nulo, reducido a detalles o a apariencias que no han modificado apenas la difícil mecánica de la coexistencia en Tánger de contrapuestos intereses, aún aumentados con la presencia, entonces reconocida, de Italia.

El viaje a Italia y el discurso del Rey.

Se comprende por lo dicho que, a pesar de cuanto antes para los españoles se había escrito en las rimbombantes notas del dictador, no aluda nada éste a tales éxitos en el balance de su gestión internacional—por lo demás nada modesto—que establece a su guisa en los artículos de "La Nación". Habría sido curioso que nos explicara la intimidad de su viaje a Italia acompañando a los reyes. La mayor y más grave dificultad de éste, que en otros tiempos estorbara la presencia de soberanos católicos en Roma—el deber natural de visitar

también a los reyes de la familia Saboya—, había quedado felizmente zanjada antes de mi salida del Gobierno. Pero allí púsose en labios de Don Alfonso un discurso inolvidable, tan pedante y enfático por su forma, como desatinado por sus orientaciones. Llegábase en él a ofrecer a Su Santidad formar parte de una nueva cruzada si el Pontífice “la levantase contra los enemigos de nuestra sacrosanta religión”. La promesa no podía parecer más oportuna en el estado actual de los problemas de conciencia en el mundo. Y por una nación que pretende ser colonizadora y protectora, no conquistadora, de un país de “infieles”, como Marruecos. Afortunadamente, Pío XI, con soberana discreción, dió en su respuesta admirable ejemplo de comprensión y de tolerancia a nuestro asombrado y belicoso gobernante.

La retirada y el reingreso en la Sociedad de las Naciones.

No se nos ha referido tampoco cómo y por qué salió violentamente España de la Sociedad de las Naciones, cómo y por qué volvió a ella, esta vez con humildad evangélica. Hizose así sin haber obtenido ventaja ni concesión alguna, que ya no se hubiera podido cotizar al salir de Ginebra en un momento de rabieta de niño mal educado y poco dispuesto a la convivencia en asambleas numerosas y de solemne controversia. Naturalmente, en éstas no hallaban ni podían hallar eco las lucubraciones con que a las veces y “a la bonne franquette” favorecía a sus conciudadanos—obligados al silencio aun en el comentario íntimo—el dictador de España.

La cordialidad aparatosa y estéril con Francia.

Su política internacional se ha reducido a mantener una cordialidad aparatosa, pero estéril, con los Gobiernos de la República Francesa, a efectos visibles de política interior española. Los demócratas de mi país, hijos de la Revolución Francesa, como todas las democracias latinas, no guardamos rencor a nuestra hermana Francia por la extrema y poco discreta complacencia con la Dictadura de algunos de sus gobernantes. Aspiramos a rectificar semejante política por una cordialidad recíproca, inspirada en la afinidad de sentimientos, intereses e ideas. Pero hacemos notar que de la actuación dictatorial nos queda en estos mismos momentos, como rastro doloroso, la ruptura de hecho que al régimen de nuestra vinicultura impone cierta iniciativa parlamentaria francesa poco meditada, votada sin protesta durante la Dictadura, a la que hasta ahora el Gobierno Tardieu-Briand no ha querido poner remedio, a pesar de la evidente infracción unilateral al Tratado francés español y a sus acuerdos complementarios que ella encierra.

La política del Mediterráneo. Un tratado que no debe existir.

Los españoles constitucionalistas, aun sin requerimiento alguno de Francia si no lo hay, hemos de preocuparnos también de ciertas noticias publicadas insistentemente por la Prensa italiana, según las cuales existe un Tratado secreto, que Primo de Rivera, complaciente, aceptó, entre ambas Dictaduras y con influencia directa sobre la política del Mediterráneo.

No hace mucho tiempo que la revista fascista "Antieuropa", en ocasión en que de ninguno de estos delicados temas podía escribirse en España, publicaba la traducción de un artículo de Hiram Methewell, aparecido en el "Harper's Magazine", de Londres, bajo el pomposo título de "¿Mussolini emperador de los latinos?". Dicha revista vive en íntima comunicación con el "Popolo d'Italia", dirigido, como bien se sabe, por el hermano del propio "duce". En tal artículo, en medio de fantasías más o menos imaginativas respecto a una guerra contra Francia "en un futuro relativamente próximo", se escribe el párrafo siguiente: "Mientras tanto, él (Mussolini) ha terminado ya la osamenta de un imperio muy poderoso. *España está ligada a Italia por una alianza estrecha que implica la ayuda de la flota española y la libertad de los puertos españoles en favor de Italia en caso de guerra.*" Sinceramente digo que yo no creo que el general Primo de Rivera, por su exclusivo arbitrio, osara comprometer a España en una aventura de tal índole. Ni yo conozco en la vida española hombre constitucional, monárquico o republicano, capaz de intentar que nuestro país pasara en caso de guerra por las consecuencias de un Tratado semejante y en tales condiciones otorgado. Pero la misma oportunidad del tema relativo a la política mediterránea, desflorado en Londres en estos días sin la presencia de España, obliga a un conocimiento público del asunto y a una declaración terminante en cuanto en España funcione el Parlamento. Estos graves problemas se tratan ya en los pueblos libres con diáfana claridad. Nadie puede disponer del destino de España, de sus hijos, de su territorio y de su caudal sin el concurso de sus órganos constitucionales.

Fuera del régimen de derecho aun en las relaciones privadas.

Es la Justicia el primer atributo de las sociedades modernas. Todos los pueblos civilizados discurren y acumulan soluciones para hacerla rápida y económica, para sustraerla a la influencia de las pasiones y del dinero, para garantizar, mediante la independencia del Poder Judicial, la efectividad de los derechos ciudadanos. Sobria es la alusión que el dictador dedica en sus artículos a esta elevada finalidad, que debió perseguir su Gobierno para responder a los anhelos populares, y que no hizo otra cosa que embarullar y burlar. Durante seis años largos, España ha vivido fuera del régimen del Derecho aun en las relaciones privadas. Para el Gobierno de la Dictadura no había Códigos ni leyes de procedimiento. No existía de hecho

sino la voluntad del dictador al servicio de sus mesnadas. Ejemplarísimos han sido los casos en que jueces y tribunales osaron y pudieron contrariar aquéllas. Pero no lo hicieron sin recibir bien pronto el latigazo del Poder. Así con el juez Prendes Pando, así con el presidente del Tribunal Supremo, don Buenaventura Muñoz, que hubo de ampararlo; así con tantos otros cuya lista no sería fácil formar. De todas las personas al servicio incondicional del dictador, ninguna tan repulsiva y siniestra como la de su espolique en el ministerio de Justicia, consagrado febrilmente a tapar con su toga la desnudez cínica de la situación.

El lector, cuyo juicio ha pretendido confundirse mostrándole ciertos progresos materiales a mucho precio obtenidos, debe saber ya que en España se suspendió la efectividad de cuantas leyes y disposiciones garantizaban la independencia de jueces y magistrados; que el ascenso, el traslado y aun la carrera misma de éstos quedaron así en manos del Gobierno, propicio a una ejemplaridad negativa, generoso con los serviles y venales, cruel con los rectos y concienzudos; que el Gobierno se reservó también la facultad de suspender el efecto de las sentencias de los Tribunales, con lo cual, prácticamente, no había medio de reparar desafuero alguno; y que si alguien escapaba a las mallas de tal justicia, las multas extralegales, impuestas sin limitación de cantidad y sin sujeción a otras reglas que el furor y el capricho de los que mandaban en España, y la detenciones gubernativas, sin tiempo determinado ni garantía personal alguna, completaban la red de su delicioso sistema jurídico.

El sarcasmo de que la Dictadura no fué sanguinaria.

Ningún sarcasmo tan odioso como el que insistentemente se ha repetido afirmando que la Dictadura no se tiñó de sangre las manos. Aparte de que hay agravios morales que no ceden en dolor a la tortura física, habría que aportar también la estadística de los suicidios que se registraron, sobre todo en los primeros tiempos de persecución y de terror, en toda España. Y se olvida esa terrible página de Vera, en la que un suceso provocado principalmente por maquinaciones policíacas—que un caballero comandante de Carabineros, el honorable don Juan Cueto, afirma y relaciona detalladamente, afrontando persecuciones y daños en su persona y en su carrera—da por fruto una triple condena de muerte. Que el primer Consejo de guerra absolvió a los procesados. Que hubo un fiscal inteligente y austero, don Carlos Blanco, honor del Cuerpo Jurídico Militar, que se negó a acusar ante el Consejo Supremo y fué relevado de su destino. Que, en fin, en esa disyuntiva angustiosa, “¿culpables o inocentes?”—que en tal extremo precisada aconsejó siempre, siempre, siempre a los Gobiernos, cuando menos, el indulto de la pena capital—, el de la Dictadura, en un delito político, se pronunció por la ejecución. Y ejecutados fueron aquellos desdichados, con el horrendo episodio de que uno de ellos se arrojara por una ventana y muriese estrellado

contra las losas del patio de la cárcel antes que sentir en su carne la dura sentencia de la justicia de los hombres... ¡Esta era la paternal política de la Dictadura y su concepto del empleo de los resortes de piedad que las leyes ponen en manos del Poder en las sociedades civilizadas!

Aún habría que recordar también la complacencia y el frenesí con que persiguió, desterró y encarceló a hombres eminentes, gloria de la intelectualidad. Fué en los primeros tiempos, cuando ya la venerable figura de don Miguel de Unamuno era conducida a Canarias con Rodrigo Soriano. Después las Islas Chafarinas recibían al profesor Jiménez de Asúa y a los escritores Cossío y Casanueva. Luego todas las provincias daban nutridos contingentes de abogados, de médicos, de profesores, de estudiantes, al extrañamiento. Se encierra en la Cárcel de Madrid al eminente letrado, decano hoy de su Ilustre Colegio y presidente de su Academia de Jurisprudencia, don Angel Ossorio, por el enorme delito de haber escrito una carta particular molesta para el Gobierno, que la Policía sustrajo y leyó, como tantas otras. Confinase también al insigne médico, de reputación universal, don Gregorio Marañón, y se le exigen *porque sí* cien mil pesetas de multa, que paga. Toda la Directiva del Ateneo de Madrid ingresa en la cárcel. También es presa y destituida la del Colegio de Abogados de Barcelona, con el venerable Abadal al frente. Sería interminable la lista de los ciudadanos esclarecidos a quienes la Dictadura y los tiranuelos locales vejan y persiguen en todas las provincias. ¡Olvidó también aludir a ella en sus artículos el general Primo de Rivera!

El absurdo desbarajuste de la enseñanza.

Menguada fué asimismo la insinuación que hiciera éste de la obra del Gobierno en la enseñanza pública. En ningún aspecto como en él podían y debían haberse mostrado audaces y expeditivos el Directorio, primero; luego, el llamado Ministerio civil. Hasta las izquierdas extremas, en el Parlamento, habían excitado siempre a los Gobiernos a ejercer una verdadera y salvadora dictadura con tal de incorporar a España al movimiento pedagógico universal. Fué, sin embargo, el ministerio de Instrucción Pública, durante los seis años indignos, el de la parsimonia, la incoherencia, la vacuidad. Difícil resultaría hacer su balance, como no se cifrara en la celebrísima reforma de Segunda Enseñanza, anarquía docente que volvió locos a padres, profesores y alumnos, sin lograr jamás una solución a la charada ministerial, tampoco comprendida ni descifrada en el propio ministerio cuando a él se acudía.

La concesión a los Colegios de Deusto (jesuitas) y El Escorial (agustinos) de componer mayoría en sus Tribunales de examen por sus propios profesores determinó la agitación escolar a que se refiere el ex dictador, provocada por el Gobierno mismo, que acabó por derogar su obra después de invocar en vano muchas veces el con-sabido principio de autoridad, por nadie tan mal tratado como por

los gobernantes que atropellan primero y rectifican después. Humilmente sometióse el ministro a la prueba de su propia pública descalificación..., y continuó sesteando en su cargo, turbado el sueño—eso sí—por el vocerío que constantemente le acompañó y le siguió, entre coplas, silbas y bromas de todo género.

Falto de personalidad dentro del Gobierno, limitado a secundar sin observaciones al presidente, como el más modesto de sus secretarios, nunca tuvo una iniciativa de alta envergadura para la enseñanza española. Catedrático él, allanóse sin rubor—no lo habrán olvidado los universitarios argentinos—a la prohibición policiaca de las conferencias anunciadas en la Universidad de Madrid por el docto catedrático, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires, don Mario Sáenz, aun no habiéndose éste de referir para nada a la política española; a que se hiciera otro tanto con el ex ministro mejicano de Instrucción Pública don José Vasconcelos; y a firmar el cese de profesores eminentes, devueltos ahora a sus aulas por el Gobierno Berenguer.

Remata la obra dictatorial docente este dato que la Prensa española registra con asombro; mientras los presupuestos todos, de 1923 acá, han subido en 1.500 millones de pesetas—de ello hablaremos en el próximo artículo—, y al mismo tiempo que solo por el presupuesto extraordinario Guerra pretende gastar 800 millones y Marina 900, el ordinario de Instrucción Pública aparece en 1930 con siete millones menos que en el ejercicio anterior. El presupuesto total de este ministerio se cifra en 196 millones. El de acción en Marruecos llega a 293, aun después de la “pacificación”. ¡Es un símbolo de cómo se entendía por la Dictadura la reconstitución de España!

Un resumen de los seis años indignos.

Para cerrar este artículo consagrado a la vida civil durante el período que acabó el 28 de enero, el lector extranjero deberá no olvidar lo que el general Primo de Rivera omite. Y es que España ha vivido durante los seis años indignos:

- Sin Parlamento.
- Sin Diputaciones Provinciales que eligiera el pueblo.
- Sin Ayuntamientos que también designaran libremente los ciudadanos.
- Con régimen de Censura severísima para la Prensa, extendida no sólo a los asuntos meramente políticos, sino también a los actos administrativos y a los negocios realizados bajo la Dictadura.
- Sin independencia de sus jueces y Tribunales, sometidos al libre arbitrio ministerial.
- Retenida por el Gobierno la ejecución de las sentencias judiciales que considerase convenientes para su interés político.
- Suspense el derecho de los Colegios de Abogados a designar libremente sus propias Juntas.

—Suspense el derecho de las sociedades a designar igualmente las suyas.

—Con delegados gubernativos (militares) en todos los partidos judiciales.

—Bajo un Código penal promulgado por el Gobierno sin intervención del Parlamento.

—Bajo un decreto de multas extralegales, sin sujeción a reglas ni limitación alguna.

—Sin las garantías constitucionales que disfrutaban los ciudadanos de todos los pueblos modernos. El domicilio y la correspondencia han sido constantemente violados por la Policía.

—Bajo unos presupuestos en que los ingresos y gastos del Estado, sus tipos y sus procedimientos de exacción, eran libremente establecidos por la Dictadura.

—Bajo un régimen que se llamaba protector de la economía nacional, en el que ni una caldera ni un artefacto podían establecerse sin permiso del Gobierno y conformidad de sus amigos; mucho menos una industria nueva.

—Bajo un régimen de concesiones, también libremente acordadas por la Dictadura, en el que se derramaban los millones y el aval del Estado.

—Suspense el Estatuto que garantiza la inamovilidad de los funcionarios del Estado.

—Clausurado el Ateneo de Madrid.

—Cerradas las clases la mayor parte del tiempo en las Universidades y en los Centros de enseñanza.

Este resumen que aun a muchos de mis compatriotas asombrará al leerlo escueto y tajante, ha sido, en suma, la vida civil de España durante el período a que consagró su loa el adventicio colaborador de "La Nación". Piedad, sí, para el hombre que ha muerto. Inflexible condenación para su obra. No la olvide España. Aprendan y escarmienten en ella los pueblos extranjeros que por su suerte ignoran lo que es de cerca una dictadura.



Residencia
de Estudiantes



Residencia
de Estudiantes



Residencia
de Estudiantes



Residencia
de Estudiantes



Residencia
de Estudiantes



Residencia
de Estudiantes



Residencia
de Estudiantes



Residencia
de Estudiantes



Residencia
de Estudiantes

LOS CAUDALES PÚBLICOS Y LA DICTADURA

Habría podido en cierto modo la Dictadura disculpar su advenimiento, y aun su permanencia durante tantos años, si la gestión de los intereses públicos por ella realizada señalase un progreso notorio y considerable respecto de los Gobiernos constitucionales. Su libertad de actuación, sin sujeción a normas legales, que tuvo buen cuidado de declarar desde primera hora en suspenso, facilitaba, a título de "salud pública", la implantación de medidas radicales y salvadoras, de aquellas que en otros tiempos hubieran acaso tropezado con dificultades ante las Cámaras por los famosos "vicios del parlamentarismo". La propia nueva división territorial que Primo de Rivera ofrecía en Barcelona y que había de sustituir a la añeja de Bravo Murillo, todavía vigente en España, habría sido una iniciativa muy propia de la Dictadura, simplificadora de gastos, organismos y trámites inútiles, sin tropezar con la conocida resistencia de las localidades a perder su Capitanía general, su Universidad, su regimiento o su Juzgado.

Todo lo que se permitía con respecto al presupuesto.

Nada de ello hicieron, ni intentaron siquiera, la Dictadura de generales y el llamado Gabinete civil. Comenzó el nuevo régimen, claro es, por prometerlo todo, como el más vulgar y desacreditado de los viejos políticos hubiera hecho. Pero nada, absolutamente nada realizó, a pesar de su plenitud de medios, en el camino de una nueva estructuración del presupuesto del Estado, con ventaja para los servicios útiles y economías para el contribuyente. Se limitó durante los primeros meses a implantar reglas severísimas para que los empleados asistieran a la oficina; modestas recetas que sin tanto estrépito habíamos ya aplicado muchos ministros del viejo régimen mediante la soberana eficacia del ejemplo, bastante descuidada en los tiempos regeneradores. Y a publicar todos los meses las plazas de

sobreguardas de montes y de porteros de los ministerios que se habían amortizado. Estos humildes funcionarios fueron las víctimas propiciatorias elegidas para ofrecerlas al público de la galería.

Por lo demás, el jardín frondoso de la administración española no sufrió daño eficiente de ninguna especie. Al contrario, creáronse en él centenares de nuevas plantas parásitas, multiplicadas amorosamente entre el regocijo de ayudantes, tertulios, secretarios y parientes de los tiranuelos. La tendencia a aumentar los gastos, señalada en las Cámaras deliberantes por todos los tratadistas e inspiradora de medidas restrictivas aun en el Parlamento inglés, fué superada enormemente por el reducido conciliábulo del Gobierno Primo de Rivera, gracias a la carencia de toda fiscalización pública. La proclaman así no sólo los datos—algunos muy cómicos—insertos ahora en la Prensa española, reveladores de un desenfreno singular en la acumulación de sueldos, gratificaciones y emolumentos de todo género en individualidades afectas a la situación que cayó el 28 de enero, sino las cifras oficiales dadas a la "Gaceta", como fruto de un paciente y concienzudo trabajo de ordenación, por el actual ministro de Hacienda.

La gestión económica y financiera.

La gestión económica y financiera del período septiembre 1923-enero 1930 exigirá no ya el espacio posible en este artículo de los dedicados a "La Nación", sino todo un libro de exposición y de crítica. Pero no es preciso aquel trabajo fundamental para mostrar al lector, por una simple exposición de números y datos, la clave del principal descrédito y del merecido derrumbamiento de la Dictadura. Jamás Gobierno alguno del llamado viejo régimen procedió con tal desenfado, con tan desatinada prodigalidad, con tan imperturbable olvido de la ley y de la ética. Nunca se contempló en España una desproporción tan cínica entre los programas y los actos, entre las notas oficiosas y las realidades de gobierno, entre las protestas públicas de escrupulosidad y orden y la realidad tangible de desenvoltura y anarquía en la administración. Nunca hubo tampoco facilidad comparable para que el Estado amparase con su firma y con sus fondos las más desatinadas concepciones del arbitrio imaginativo o sencillamente desvalijador... La clásica unidad de caja y de contabilidad, dogma de toda Hacienda escrupulosa, se quebrantó en multiplicidad de aquéllas y variedad de éstas. Las protestas del Tribunal de Cuentas, harto expresivas en un régimen de franca arbitrariedad que no admitía, sino que castigaba, cualquier reflexión de sus funcionarios, perdíanse en el vacío año tras año. Se prodigaban las concesiones más onerosas para el Tesoro con anticipos de fondos y garantía de interés a empresas desahuciadas en el mercado del dinero. Se engañaba al pueblo con la noticia de falsos excedentes de ingresos que no brotaban de la realidad de la cuenta del presupuesto, sino de un vulgar cubileteo de partidas y de cantidades.

Vivían aquellos gobernantes—según expresiva frase del Evangelio, recordada en ocasión solemne por el insigne Maura— “como si nunca hubieran de morir”. Como si la supresión de la publicidad y de la crítica, blando almohadón en el que reposaban por el pronto los ministros y su presidente, hubiera de ser eterna y no existiera algún día la Historia para anotar y censurar tamaños desafueros. Como si al desaparecer ellos de la “Gaceta” no hubiera de quedar un español consciente para referirlo y comentarlo... No se necesitó siquiera que los ciudadanos hablasen. A la voz justiciera de la opinión de España se anticipó el grito hiriente de la cotización de la peseta en los mercados extranjeros. La finanza internacional se mostró más enterada de la realidad que lo que hubiera convenido a la Dictadura. Y los consabidos “imponderables” acreditaron a ésta y a sus valedores que no es lícito ni útil ya en el siglo xx imaginar que pueblo alguno puede vivir en una singularidad de régimen en ninguno de sus aspectos, ni en Política ni en Economía. Para proclamarlo y vivirlo no había ciertamente necesidad de requerir, según se hizo, el concurso de técnicos extranjeros. Ni España es un país balcánico, de Hacienda averiada, ni los solicitados descubrieron solución alguna que no hubieran ya mostrado con patriotismo, preparación y acierto los técnicos españoles, previamente consultados... y desatendidos.

¿Datos? ¿Cifras? Para conocimiento del lector extranjero, en corroboración gráfica de lo que queda escrito, recopilemos y mostremos algunos de los que en torrente acusatorio contra la Dictadura publica ahora, no sólo la Prensa española, sino el propio ministro de Hacienda. A continuación anoto unos pocos.

Según los números insertos en el “rapport” oficial de la Comisión nombrada para el estudio del problema del cambio, resulta que en el período de la Dictadura se han emitido más de diez mil millones de pesetas (10.755) de Deuda del Estado. Es decir, en seis años de tal régimen, más que en todo un siglo precedente hasta 1923 (pesetas Deuda, millones 9.339). Aún habría que añadir los 350 millones de pesetas oro emitidos con posterioridad.

Por disparatada que parezca la cifra, y aun deduciendo la parte imputable a la consolidación de Deuda flotante, no es extraño que a ella se llegara, tomando en cuenta el progreso de los gastos. Su crecimiento es fantástico, de una verdadera inconsciencia. El presidente del Consejo dictador de España, daba el ejemplo. Sus secretarios de despacho lo imitaban. El último presupuesto de la Presidencia (1923) en el régimen constitucional importaba poco más de un millón de pesetas (1.386.000). Acumulando el de Estado (12 millones y medio), suman catorce millones en números redondos. El presupuesto de la Presidencia (pagos efectuados, según la “Gaceta”) en 1928, entre el ordinario y el extraordinario, pasa de cincuenta millones. Su análisis detallado valdría la pena de un artículo especial. Allí se han refugiado todas las concepciones, todas las fantasías, todas las “amabilidades”... con cargo a la nación. No falta ni siquiera una curiosa partida, “Gastos de acción política y social”, de nueva invención y

libre disposición en la Presidencia, como una dotación más del famoso "fondo de reptiles".

Una carga sobre el contribuyente de mil ochocientos millones de pesetas.

Así, el presupuesto total del Estado, que era en 1923 de poco más de tres mil millones (3.000.048.0000) de pesetas, monta (pagos efectuados, datos de la "Gaceta") en 1928, ordinario y extraordinario, ferrocarriles y las llamadas "Confederaciones", 4.804.984.292 pesetas. Es decir, que la Dictadura ha echado sobre el contribuyente español un peso de *mil ochocientos millones de pesetas más* en un presupuesto que era de tres mil. Y aún habría que cifrar—no hay datos oficiales completos y no quiero hacerlo por propios cálculos—la resultante de los nuevos Estatutos provincial y local, que al autorizar a Diputaciones y Ayuntamientos de la Dictadura nuevos arbitrios y recursos han multiplicado las gabelas hasta en la más pequeña aldea. ¿Extrañará a nadie, después de lo escrito y aparte de la baja de la peseta, que España sea hoy uno de los pueblos más caros de Europa y donde por ello se hace difícil la vida de las clases media y proletaria?

El superávit, que festejaba ruidosa y pintorescamente la Dictadura, no existía, según con severidad laudable ha hecho público en nota oficial muy justificada el actual señor ministro de Hacienda. Del cuadro que éste ha enviado a la "Gaceta" resulta que su previsión para 1930, en cuanto a los gastos—siempre sobre "la legalidad ilegal" promulgada por la Dictadura—, asciende a 4.000 millones de pesetas en números redondos (gastos de Estado, sin incluir Caja Ferroviaria y Confederaciones), 3.997.798.052,31 pesetas exactamente. Y calculados los ingresos en 3.669.672.082,50, aun después de introducir ciertas ciertas economías, anulados determinados créditos y computado el exceso de ingresos sobre los pagos resultantes del ejercicio 1929, resulta un déficit inicial para 1930 de 200 millones de pesetas en números redondos. ¡En ello han parado todos los dislates de aquellas inolvidables notas oficiosas, y todo el regocijo de aquellas cabalgatas y aquellos "viajes patrióticos"..., pagados también, según ahora se ve, con fondos del Estado, de la Provincia y del Municipio!

Los alegres planes del presupuesto extraordinario.

El presupuesto extraordinario, decretado por el Gobierno de la Dictadura, sin concurso alguno del Parlamento—que no existía, como es bien sabido—, por una duración de diez años, luego en ciertas consignaciones no reducido, pero sí distribuido en tres anualidades más, sube por encima de 3.500 millones de pesetas (3.538.947.550), que habrían de atenderse con Deuda. De continuar la ejecución de tan alegres planes, y aun sin el aumento de gastos no calculado, que

es siempre natural y automático complemento de tal política, la Deuda pública de España llegaría bien pronto a 24.000 millones de pesetas. El servicio de intereses y amortización de la que ya existe en circulación (presupuesto para 1930) asciende a más de 908 millones. ¿Adónde íbamos a parar por semejante camino? No olvidemos que el Gobierno derrumbado el 28 de enero había concedido también el aval del Estado a negocios y asuntos diversos por cerca de 700 millones de pesetas más.

La desapasionada imparcialidad en que estos artículos se inspiran obliga a consignar una mención benévola para las Confederaciones Hidrográficas que vienen funcionando en diferentes cuencas de España. Pueden en breve lapso de tiempo transformar grandemente la potencia productora de cultivos y de energía, así como las condiciones de vida de labradores y obreros. Responden al ideal de la "política hidráulica" propugnado por Costa e iniciado desde el Gobierno por el benemérito Gasset, de grata memoria. Reorganizarlas, acomodándolas a las posibilidades económicas y a un ritmo de prudente previsión; no suprimirlas ni condenarlas al colapso de una centralización absorbente y antieconómica, será obra de buena política. Para meditarla y concretarla es previo el conocimiento claro de los datos que el señor Argüelles reúne en estos momentos.

La sangría de Marruecos.

Los gastos de Marruecos no pueden omitirse en esta relación. Aparecen cifrados por el ministro de Hacienda en 293 millones para el ejercicio que corre. Hay allí todavía 60.000 hombres de tropa regulares y 30.000 de soldados indígenas. Con ello resulta que de aquella cifra de gastos presupuestos, más de 220 millones se aplican a los puramente militares. Esto no puede subsistir en una racional y económica "política de pacificación". Con razón lo escribía así "The Times", de Londres, hace dos meses, añadiendo que el asunto "sería objeto de una gran atención si España poseyera un verdadero Parlamento". Apenas si la Censura permitió entonces a los españoles que se enterasen de las cifras ni del comentario. Confiemos ahora en que, sin esperar a la apertura de las Cortes, el Gobierno provea sobre la reducción de estas cifras, que hacen recordar amargamente otros períodos de dominación exclusiva por las armas.

El problema de los cambios y la discusión ministerial.

La gestión dictatorial en el problema de los cambios merece siquiera una indicación rápida en la presente síntesis de la situación económica y financiera de España después de la Dictadura. La responsabilidad de ésta es enorme y clarísima. No resulta solo de su prodigalidad descabellada en materia de gastos, de su insistente petición de auxilios a bancas y banqueros en el exterior y de su errónea

concepción del empréstito oro, sin cuidarse de conocer previamente el "stock" de divisas en España, con que había de contar para no producir, como produjo ella misma, el alza de la libra, sino también de aquella locuacidad impertinente y atropellada que ha distinguido el período que juzgamos. Nada hay tan delicado y vidrioso como la relación de actos y palabras de cualquier Gobierno con el crédito de un país. Durante la Dictadura española las revistas financieras del mundo ha tenido que anotar y comentar, muchas veces con asombro, las orientaciones más contradictorias y las declaraciones más absurdas.

Bastará que recordemos cómo un día, ante la baja de la divisa nacional, el presidente del Consejo anunciaba "urbi et orbe" que el Gobierno español se aprestaba a comprar cuantas pesetas saliesen al mercado, "bien seguro de que haría con ello un gran negocio". La invitación, naturalmente, no fué desoída por los especuladores. Bancas conocidas hubo que ganaron algunos millones en pocos días, cediendo y tomando pesetas del Tesoro español sin riesgo alguno después de aquella declaración. Más tarde, en el mes de octubre último, agotada torpe y estérilmente la masa de maniobra, nueva e indiscreta declaración presidencial. "El Gobierno—dijo—renuncia a intervenir en la cotización de la peseta." El efecto fué fulminante. ¡Una baja, en una sola sesión de la Bolsa de París, de 28 puntos!

Se comprende, según las circunstancias y los elementos de que se disponga, las dos políticas: la de la intervención y la de la abstención. Lo que no se concibe, ni puede defender nadie, ni ha explicado en sus artículos el general Primo de Rivera, es *la otra*: la de hablar y escribir incesante e irreflexivamente, mostrando al agio y a la traversura bursátiles el plan de un Gobierno, que en tales materias ha de practicar el silencio, el silencio hermético, como el único serio y honrado sistema de defensa del Tesoro y de la fortuna de todos los españoles.

En otros países de Europa, para explicar el demérito de su moneda, pueden los gobernantes señalar en general los daños determinantes por la guerra y sus consecuencias. En España no existe la posibilidad siquiera de semejante explicación. Nuestro país, neutral desde el principio de aquella contienda, recibió considerables beneficios, que algunos calculan en más de 5.000 millones de pesetas. Aun descontando la parte que se perdió después en especulaciones sobre divisas extranjeras, quedó en España todavía una gran masa de provechos. Sin embargo, la crisis de la peseta se ha producido en términos gravísimos. En el espacio de dos años, desde el momento de la ilusión de la posible paridad oro que el Gobierno de la Dictadura mostraba en sus declaraciones, atendidas las cotizaciones de la divisa nacional, hasta la gran catástrofe de 1929-30, ¿qué ha pasado para explicar y justificar aquélla? No ha ocurrido nada, ni en el exterior ni en el interior, que la razone o siquiera la disculpe, fuera de los actos y de las omisiones del Gobierno dictatorial. En él, y sólo en él, hay que investigar y exigir las responsabilidades consiguientes. La libra, a más de 41 en Londres, tipo superior al de nuestras guerras

coloniales. Y una pérdida que los informes privados—todavía no existen oficiales acerca de tal extremo—calculan por lo menos en quinientos millones de pesetas, tirados en la maniobra estéril. Tal es el ruinoso balance de la Dictadura en este respecto. ¿Qué gobernante civil del “viejo régimen” hubiera podido afrontar nada semejante? ¿Qué no habría dicho de él en tal caso la pluma arrebatada del general Primo de Rivera?

Los caudales públicos y las iniciativas privadas.

Hubiera habido también que leerlo y oírlo si otro Gobierno que no fuera el suyo practica el régimen de concesiones por cuenta y cargo del Estado que se registraron en los últimos años, y sobre las cuales no se permitió crítica alguna a la Prensa, aherrojada para la de los negocios tanto por lo menos como para la de la acción política. No entra en mi ánimo precisar ahora el capítulo de las denuncias administrativas, función incompatible con la naturaleza de estos artículos y extraña a mi propósito por el momento. Tiempo y ocasión habrá de plantear con plena eficacia la cuestión de las responsabilidades, que nadie, sea quien quiera, podrá ya escamotear a la opinión española. Bastará por hoy ofrecer o recordar algunos botones de muestra. Así podrá apreciarse cómo se ha defendido y regulado la aportación de los caudales públicos a las iniciativas privadas. Recojo los datos de la “Revista de Economía y Hacienda”, que con tanta competencia dirige don Daniel Riu. Una Sociedad de producción hidroeléctrica. “Valor inicial de las aportaciones, 50.000 pesetas. Se transforma en un paquete de acciones de fundador, que hoy valen 25 millones de pesetas”. ¿Específico maravilloso para tamaña metamorfosis? El concurso del Estado. Este otorga:

a) 50 por 100 del presupuesto de ejecución material de cada embalse en concepto de subvención, aumentado en un 5 por 100 de dirección y administración y en la cantidad necesaria para las expropiaciones.

b) 40 por 100 del presupuesto de los pantanos en concepto de anticipo, reembolsable en veinte años y con un interés del 3 por 100 anual.

c) El Estado abonará a la Sociedad un interés del 5 por 100 anual sobre las cantidades que correspondan al Estado y que éste no haya pagado a su tiempo debido.

A cambio de esto, el Estado pasa por ser propietario de los embalses, si bien la Empresa se reserva el derecho de aprovechamiento de la energía de las aguas embalsadas durante noventa y nueve años.

Concesión tan generosa se hace sin que el expediente se hallara siquiera legalmente completo. Se ha completado después.”

Una sociedad de canalización y fuerza. A la concesión “el Estado, además del dominio eminente, aporta la mitad del importe del presupuesto de todas las obras y también el 50 por 100 restante si los caminos, malecones y tránsito sobre las esclusas se utilizan para el

tránsito público (que ya se utilizarán), y también el 50 por 100 del presupuesto de construcción de un pantano, más el préstamo del 40 por 100, reintegrable en veinticinco años, contados a partir de la terminación de la obra. De suerte que el concesionario no tiene que desembolsar más que el 10 por 100, y a vivir. Todas las obras de conservación y sostenimiento del calado en el río y en el pantano, que es sostener la capacidad de los saltos de agua, son también por cuenta del Estado, de modo que el concesionario pone las turbinas y casa de máquinas, o poco más, y el negocio queda en plena marcha y con el éxito financiero rotundo que expresa el estado de los valores de la Sociedad y sus cotizaciones respectivas."

Podían seguirse citando casos no menos alarmantes en ferrocarriles y en servicios públicos de naturaleza diversa. En todos ellos se muestra aquel desafortado criterio que llanamente exponía el Directorio mismo al Consejo de Obras Públicas al remitirle el expediente tan discutido de un cierto ferrocarril: "El Consejo—decía—no debe considerarse cohartado por trabas de preceptos legales hasta ahora establecidos, que, dado el especial modo de funcionar del Directorio, se pueden sustituir por éste por otros más expeditos y prácticos." ¡Así se acreditó, en efecto, entonces y más tarde! La compañía que se había constituido para construir y explotar el ferrocarril, apercebida del desastre que la explotación representaría para ella, se da trazas a fin de que el Estado la recoja, guardando aquélla exclusivamente la provechosa contrata de la construcción. Este negocio es el que contenía en sus estatutos fundacionales aquel curioso párrafo quinto del artículo segundo inserto en una revista de ingeniería y reproducido más tarde en el interesante libro "Al servicio de la Historia. Bosquejo histórico de la Dictadura", de don Gabriel Maura y Gamazo: "Las restantes 70.000 acciones representativas de un capital nominal de 35 millones de pesetas—dice—se denominarán acciones de fundador, y, *completamente liberadas, se destinan al pago de las gestiones para la organización* preliminar de los trabajos, desembolso hecho y *obtención de la concesión* del ferrocarril estratégico, objeto principal de la Compañía."

Esta es la justicia que se hacía y la austeridad que se estilaba en los gloriosos tiempos de la Dictadura. ¿Cómo había, con tales procedimientos, de despertarse la fe en el pueblo, moralizarse la administración, adecentarse la política y mejorar la cotización de la peseta?

Un evidente y doloroso retraso en la historia de España.

La Dictadura, pese a los incoherentes y desordenados ditirambos de quien la trajo, representa en la historia de España un evidente y doloroso retroceso en la vida pública y en las costumbres privadas. El Estado y la nación han ahondado su recíproco y ya antiguo divorcio. El ciudadano español no sólo no ha aumentado un adarme en amor por la actuación colectiva sino que ha sentido acrecida su repugnancia por ella. Las costumbres públicas eran todavía entre nos-

otros, en muchos aspectos, incipientes y precarias. Los seis años indignos engañando y tiranizando al pueblo, alejado de toda función de ciudadanía que no fuera la de cantar alabanzas en el coro de la opereta trágica, han retrasado enormemente el progreso hacia una patria mejor...

Y, sin embargo, yo proclamo ante el extranjero y desde el extranjero, después de seis años largos de voluntaria emigración, alejado de pasiones y apetitos, libre de todo estímulo de ambición personal o partidista, mi fe resuelta en el destino de España. La crisis de la peseta en la medida presente, no responde a factores específicos de la economía nacional ni a la propia situación de su Tesoro. Tampoco puede siquiera relacionarse con exceso alguno de la circulación fiduciaria. El Banco de España—según su último balance del 5 de abril—posee en sus cajas una reserva oro de pesetas 2.468.679, de las más importantes del mundo, para una suma de billetes en circulación de 4.300 millones. Bastará un período de paciente reconstitución nacional, de supresión implacable de gastos exagerados o estériles, y de minucioso ordenamiento de la Hacienda para que la peseta suba. Lograda una estabilización de hecho, que ha de prepararse por los medios mismos recomendados por la Comisión técnica a que antes aludiera, será llegado el instante de estabilizar jurídicamente. No necesitamos inventar nada. Será suficiente que recojamos la experiencia de otros pueblos, incluso la de Bélgica en su primer intento. Ella nos enseña los peligros de una estabilización apresurada o ficticia, que también padece Italia, pese al ímpetu y al arte escénico de Mussolini.

Pero no habrá tampoco que olvidar los factores imponderables, y, a la cabeza de ellos, el factor político. No vuelvan el Ejército y el pueblo a buscar en procedimientos de violencia o simplemente extravagantes lo que sólo el Derecho puro, la normalidad del Estado y el progreso cultural de la nación pueden traernos. España ha de vivir siempre ya como una de las grandes democracias del mundo: cuidando de hermanar la libertad con la autoridad; el orden en la calle y el respeto a la personalidad humana con la justicia social y los máximos avances en las ideas y en la *Gaceta*; la prosperidad material de sus elementos de riqueza y de sus trabajadores, con la eficiencia de su presupuesto y de sus servicios públicos. Preocupada de no tolerar la violencia demagógica ni allanarse a la fuerza de un pretoriano de fortuna; viviendo del contenido más que del vaso, de las esencias más que de los rótulos, de la eficacia silenciosa y augusta de la vida ciudadana más que de las charangas alborotadas, que suelen perturbarla y extraviarla sin fruto.

El péndulo de nuestro destino.

Los personajes y los partidos, cuando éstos se reconstituyan—hoy apenas existen en España—, cuidarán, sin duda, de no dar al pueblo la impresión de un intolerable “aquí no ha pasado nada”. El espectáculo de los últimos días, subiendo los prohombres las escaleras de Palacio

sin obtener siquiera previamente la menor garantía pública, y corriendo sus amigos en provincias y distritos, como en los peores tiempos, detrás de alcaldías y "organizaciones" regaladas por el Poder central, ha sido doloroso y desmoralizador. Convendrá a todos no proseguirlo. La perduración de los males que prepararon el ambiente para el pronunciamiento del 13 de septiembre sería en definitiva tan dañosa para la vida constitucional de España como una conmoción revolucionaria estéril. Otra nueva dictadura se crearía entonces, en potencia de aparente redención y de réplica adecuada. Con ella amenazan todavía los supervivientes en el naufragio del 28 de enero. Su dominación pasaría más rápida y más vergonzosa que la ya hundida. España, seguramente, no caerá en ella. Como tantas otras veces en la Historia, el péndulo maravilloso de nuestro destino ha oscilado ya de un lado a otro lado. El mismo extremo torturante en que habíamos caído señala en el opuesto la altura gloriosa y fecunda del período que ahora comenzamos a vivir... Manos a la obra.

EPILOGO



Residencia
de l'studiantes



Residencia
de l'studiantes



Residencia
de l'studiantes



Residencia
de l'studiantes



Residencia
de l'studiantes



Residencia
de l'studiantes



Residencia
de l'studiantes



Residencia
de l'studiantes



Residencia
de l'studiantes

DESPUES DE LA DICTADURA

POR LA LIBERTAD DENTRO DE LA LEY

Correspondo, agradecido, a la iniciativa de "El Sol", que quiere ofrecer a sus lectores los artículos, relativos a la Dictadura, que divulgó a comienzos de mayo, agrupados ahora en un volumen, con algunas líneas más de Epílogo. Pueden y deben ser éstas la confidencia de mis impresiones personales, después de aquel contacto con el gran público de mi patria.

Sin jactancia necia y también sin falsa modestia, cien veces más repulsiva que el orgullo, he de mostrarme satisfecho. Españoles de todas las regiones y de todas las ideas, han comunicado conmigo en estos días para expresarme su conformidad y ofrecerme su aplauso. No es el homenaje a un hombre, ni siquiera la coincidencia con una significación política determinada. Interpretarlo así resultaría de una vanidad grotesca o de un juicio que, por superficial, habría de carecer de todo valor para la apreciación crítica de este período de la vida española.

La conciencia pública puesta en pie, ante la contemplación sintética, fiel, descarnada, de lo que han sido los seis años indignos—ignorados como eran todavía por muchos españoles, en aspectos y episodios diversos—ha gritado conmigo la abominación definitiva contra los tiranuelos y los que a su sombra vivieron, y en sus arbitrariedades hallaron satisfacción para la pasión o el apetito propios. La exigencia pronta, clara, inexorable, de las responsabilidades que de sus acciones y de sus emisiones se derivan, y la revocación jurídica de su tinglado inmoral y ruinoso, es el primer imperativo para cada español del día.

Pero, al mismo tiempo, todas las cartas que a mí llegan y la expresión del juicio público, en sus manifestaciones más diversas, coinciden en estimar en mi trabajo, sobre todo, la nota de serena e imparcial reflexión con que he presentado hechos y personajes, aun

en momentos y con caracteres que habrían disculpado en mí la vibración airada de pasiones bien humanas. Y a ello añade tal forma del sufragio popular, que yo ahora leal y sencillamente recojo, su adhesión a mi fe en el porvenir más próximo de la patria, y la resuelta voluntad de la mayor y mejor parte de los españoles de hacer todo lo necesario para que aquél se logre cuanto antes, sin perder el tiempo ni gastar las fuerzas nacionales en viejas y estériles contiendas.

No nos engañemos. La prosa exclusivamente política, con fines partidistas, está, respecto de los hombres y los grupos todos, profundamente gastada y desacreditada. En nuestro país, como en tantos otros, donde por lo mismo gobiernan las coaliciones más heterogéneas. Acaso protesten de esta confesión mía algunas tertulias madrileñas. Bastará que cualquiera de sus oráculos viaje por las provincias, recorra las viejas ciudades, penetre en los pueblos del campo y hable a solas, sin aparato y sin retórica, con cualquier vecino, en la intimidad de un diálogo como el que conmigo establecen sus cartas. Recogerá así aquella misma reflexión, con gusto o sin él, pero como *un hecho*, al que hay que rendirse y del que deberán arrancar nuestras iniciativas y nuestras soluciones.

El español del día es ya un demócrata convencido, a veces aun en las filas ultracatólicas, que quiere ser gobernado como se gobierna en las Democracias del mundo, y no tolerará regresiones ni mistificaciones, vengan de donde vinieren, en la ruta hacia una plena e inmutable soberanía de la Nación. Pero, al mismo tiempo, siente la inquietud del porvenir y el apresuramiento de la vida contemporánea. Quiere trabajar tranquilo y atender normalmente a la satisfacción de sus necesidades materiales y de los recreos de su espíritu. Esta preocupación por el "vivir bien" es general a todos los pueblos y a todas las clases, después de la Gran Guerra. Considero inútil entretenerse en condenarla o en justificarla, según el temperamento y las ideas de cada uno. El hombre político ha de atenerse a las realidades del medio en que desenvuelva su actividad, aunque procure encauzarlas e incorporarlas al servicio de su propio designio ideal. Por ello, he dicho ya en otra parte que la Democracia española, para ser fuerte y durable, y contender sin desventaja con núcleos tan poderosos como los que las derechas cuentan en el país, ha de establecerse sobre un afirmado de grandes intereses que, sin daño de los principios y garantías de justicia social que inspiran hoy el Gobierno de los pueblos más prósperos y cultos, constituya el cimiento del progreso político de la Nación. No hacerlo así, pagarse solo de palabras sonoras y fórmulas vagas, vale tanto como escribir en el agua, o servir al pueblo incauto una función de fuegos de artificio: luz, ruido... y dispersión al final.

La Democracia española habrá, por lo mismo—no me cansaré de insistir en ello—de hacer compatibles los más audaces avances en el Derecho y en la Economía con un mantenimiento vigoroso del orden, en la calle y en la vida del Estado; una disciplina férrea que se imponga a todos los egoísmos de clase y a todas las violencias, de

la derecha o de la izquierda. Hay que predicarlo así y hay, sobre todo, que practicarlo y vivirlo. La primera preocupación de nosotros, parlamentarios, constitucionalistas, liberales, demócratas, ha de consistir en acreditar a nuestros conciudadanos que es ya un mito ridículo e inútil el del consabido "hombre de riñones", con un sable al cinto, como único medio de garantizar la normalidad en la Nación y en el Estado. El Poder público no es civil, ni militar. Es simplemente el Derecho en acción, rodeado de la autoridad moral y asistido por los medios coactivos que le hacen soberano, sin incurrir en la crueldad y siquiera sin exhibirse indiscreto y provocador.

No conozco tipo de Democracia más disciplinada que la República Helvética. El orden impera en todo el país, aun en las manifestaciones más pueriles de la vida diaria. Y apenas si se ve la autoridad por parte alguna, reducida a vigilar, a prevenir, a coordinar, de lejos y en silencio. El ciudadano se creó ya en la Escuela, en la ciudad populosa o en la aldea humilde de lo alto de una montaña. Todos viven después sometidos gustosamente a la ley. Y si un grupo, exaltado o perturbador, amenaza la vida colectiva, como en los desórdenes comunistas de Zurich, las milicias ciudadanas, de donde se extrae el Ejército, acuden en el acto y restablecen la normalidad. El buen suizo sigue trabajando, sabiendo que la ley le ampara. Y los gobernantes no pierden la serenidad, ni acuden a medios excepcionales, con la conciencia plena de que tras de ellos está siempre viva y despierta la Confederación entera.

En España, en el último siglo, políticamente, hemos tenido una Revolución y una Restauración. El español del día nos pide ahora una Renovación, es decir, una transformación pacífica, honda y amplia, del Estado y del País, que sustituyendo ideas, regímenes, hombres y procedimientos, mediante etapas evolutivas, coloque el nuestro en la categoría y en la condición de los grandes pueblos modernos. Ha de lograrse así sin convulsiones y sin estragos, que nos alejarían del fin apetecido, en vez de apresurarlo. Ha de facilitarlo o imponerlo la cultura del pueblo y el acomodo de los Poderes, que o transigirán o acabarán por desaparecer. Ha de obtenerse pronto, porque nuestra generación no se resigna a morir sin haber siquiera contemplado el amanecer de la nueva vida, hacia esa España mejor, con la que todos soñamos, que viene siendo tema de propagandas personales e ilusiones colectivas, desde la catástrofe del 98.

España no espera. Ni Europa tampoco. En estos mismos días en que escribo, las inflamadas arengas de Mussolini recuerdan sombríamente los discursos bélicos del Káiser Guillermo, en vísperas de la Gran Guerra. El entendimiento humano, saturado de ideas pacifistas; la piedad colectiva, que todavía contempla horrorizada los ciegos, los inválidos, los huérfanos, las viudas, que dejó aquella bárbara contienda; la crisis económica y financiera en que aún se debaten Tesoros, pueblos y monedas, incluso los de la misma Italia; todos los factores espirituales y materiales que pueden actuar y actúan sobre la Humanidad en este instante, con la Sociedad de Naciones a la cabeza, excluyen la posibilidad racional de una nueva guerra. Y,

sin embargo, el dictador italiano, en su locura agresiva, sigue hablando de fusiles, cañones, ametralladoras y aviones de campaña. Los pueblos más fuertes se resisten a reducir contingentes militares y a suspender la construcción de flotas. El viejo peligro balcánico no se excluye, pero el fuego en brasas se extiende hacia el Mediterráneo... Y España, bañada en este mar, posee en él muchos kilómetros de costa, una tradición de siglos, una flota de comercio numerosa y ágil, influencia en Africa, apetitosas estaciones de repuesto y carboneras en las islas Baleares...

No cosquilleo yo—nada más lejos de mi ánimo—en pruritos bélicos, ni imperialistas. Señalo escuetamente realidades visibles para todos, peligros ciertos, complicaciones que refleja la Prensa y tratan de conjurar las cancillerías. Y pienso que importa mostrar ante ellas una España coherente y firme, animada de un espíritu claro, servida por medios eficaces, libre de querellas interiores, hasta donde ello sea posible, y sin daño de la Renovación misma. Pero, acompañada por una opinión entusiasta y consciente, en vez de distraída o extraviada por el vocerío contradictorio de los grupos en pugna. Nada hará tanto daño a la Democracia española, en esta hora crítica de la vida nacional, en que el rodar de la Historia trae a sus manos el cincel para esculpir el Destino de todos, como aparecer, una vez más, vacilante, desorientada y dividida, soñando con la quimera para despertar en el fracaso.

Tienen razón los labriegos de Castilla, los industriales de Cataluña, los obreros de Madrid, los comerciantes de Sevilla, los profesores y los intelectuales de provincias diversas, que me escriben excitándome a que mantenga la nota de la serenidad en las almas y de la coordinación de las actividades, para preparar, en un ambiente de libertad y de respeto mutuo, la consulta que ha de producir, *en paz y por lo que salga de las urnas*, el Parlamento de la Renovación de España. De las Cortes quiere el país que brote no sólo, mirando el pasado, la liquidación de las responsabilidades de la Dictadura, sino la revisión constitucional que, en lo porvenir, afirme y consagre la soberanía del pueblo. Y, en seguida, la reconstitución de las fuerzas económicas, agrarias, industriales y mercantiles, hoy en alarmante crisis; la nivelación del Presupuesto y la restauración de la moneda nacional; la afirmación efectiva de una Justicia independiente; la reorganización del Ejército, como expresión democrática de la nación en armas; la cordial coexistencia de las regiones españolas; la transformación jurídica del régimen de la propiedad y su acomodamiento a principios de utilidad social; la revisión del Arancel y del Impuesto, con vistas al abaratamiento de la vida, sin daño para las industrias esenciales del país; la intensificación de la Escuela y de las enseñanzas técnicas y profesionales, siquiera para que, respecto a la primera, sea, al fin, cumplida la ley Moyano, y ni un niño ni un obrero queden sin obtener hueco en las aulas; la legalización jurídica del problema sindical, adormecido o aplazado hoy, pero no resuelto; la ejecución, en suma, de un programa "de realizaciones", análogas a las apuntadas, de actualidad sangrante todas ellas, con-

tenido y postulado de una acción política conjunta, en la que el servicio del país no esté tanto en las frases con que se le solicita como en las realidades tangibles, de dignidad, de cultura y de prosperidad, que se le ofrezcan inmediatamente.

¿Quién será tan visionario o tan falaz que hubiera de mostrarlas como convenientes, ni siquiera posibles, fuera del cauce de la legalidad, encendiendo una guerra civil, o apelando a una revolución, que hoy en España—no creo que en conciencia lo niegue nadie—resultaría el camino más corto, aunque bien costoso, para ir a una nueva Dictadura militar, a la polaca o a la portuguesa, por el trámite de un ensayo pseudocomunista? Si el pueblo español y sus clases directoras y sus partidos *todos*, aguantaron los seis años indignos, sin voluntad o sin medios para abreviarlos o para suprimirlos, hasta que un nuevo acto de la Corona y del Ejército puso en la calle a Primo de Rivera, ¿por qué creer ahora, *sin ninguna previa labor constructiva*, en un milagroso surgir de la ciudadanía reflexiva y creadora? Lo digo desnudamente, sin adobos, rindiendo tributo a la verdad y sin dejarme dominar por mi pasión legítima, ni por afán ninguno de desquite, inspirados por el recuerdo amargo de la injusticia y de la emigración. Todo, sin gestos y sin frases, lo supedito a la idea de mi deber y a mi callado amor a España. Estoy cierto de que, si piensan sólo en ella, los demás hombres de izquierda, monárquica, republicana o socialista—¿quién se acuerda de apelativos particularistas en esta hora solemne?—no negarán ni atenuarán la realidad de aquellas confesiones públicas, y procederán en consecuencia. Por otra parte, Juan Español no necesita de mentores para ver y juzgar lo que ha tenido y tiene todavía delante de los ojos.

Alguien echó de menos en mi trabajo el programa que dejo dibujado, sin recordar que yo había de acomodarme, hasta por probidad periodística, a la pauta trazada en los del Presidente de la Dictadura, y que el detalle de aquel plan bastaría a llenar una serie de artículos, más larga que la dedicada a la simple enunciación crítica de los actos de la tiranía. No es tampoco por entero materia para este Epílogo, reducido a la información comentada de la opinión española ante mis páginas. Lo escrito basta, sin duda, como orientación y esquema. Artículos y discursos habrán de seguirlo, a su hora, en la labor de divulgación y propaganda que nos impondrá el momento de España a cuantos creemos que, más que nunca, ahora—sépanlo los chismosos y los parlanchines inspiradores de ciertas informaciones en estos días—la política ha de hacerse limpia de toda intriga, a grito herido, mediante la Prensa o en la plaza pública. Con palabras llanas, pero no con agresiones, ni exclusivismos del "todo o nada", que perdió siempre a los movimientos populares. Imponiendo la Constitución y consagrando para siempre la Libertad. Pero, cuidando de no extraviarnos en el laberinto de las utopías, ni provocando con nuestras divisiones la anarquía. El país no habría así de seguirnos, por instinto de conservación. Bastaría el temor generalizado de una tal contingencia para provocar la reacción contra nosotros y contra nuestras ideas.

La Historia es maestra de la vida. Gusto de recrearme y aleccionarme en ella. Huyamos del ejemplo que condenaba Salustio en su "Guerra de Yugurta". No seamos como aquel demagogo que el clásico historiador nos muestra. Dice que vivía "dedicado a llenar la cabeza de sus oyentes, de palabras sonoras y frases hechas, encaminadas por su ambición a excitar las pasiones, para trabajar después en la labor de apaciguarlas, por miedo a las consecuencias y a su responsabilidad, que pretendía evitar a última hora con soluciones anodinas".

Contemplemos la realidad y midamos bien nuestros medios. Hagamos posible lo necesario, acomodándolo al ritmo y a las modalidades de la vida española. Y no nos preocupemos, ahora, después de seis años de Dictadura, y cuando el mundo entero evoluciona hacia nuevas formas de gobierno y de régimen político, de los tópicos que ya se caían de viejos en 1923. La primera, más alta y más humana política, es aquella que llamó el gran Costa "del calzón corto y de la capa parda". Hoy, como cuando él escribía y flagelaba, "la mitad de los españoles se acuesta con hambre". No hay política democrática que no resulte un verbalismo huero, si no atiende, ante todo, a las realidades sustantivas, económicas y sociales, de la Nación. Escribid lo que queráis en las Constituciones. Mientras no forjéis un ciudadano culto y con independencia, siquiera relativa, el fantasma de la Dictadura en España seguirá siendo, para unos, la pesadilla, para otros, la panacea... Empecemos, pues, por el principio.

SANTIAGO ALBA.

París, 26 de mayo de 1930.



Residencia
de los estudiantes



Residencia
de los estudiantes



Residencia
de los estudiantes



Residencia
de los estudiantes



Residencia
de los estudiantes



Residencia
de los estudiantes



Residencia
de los estudiantes



Residencia
de los estudiantes



Residencia
de los estudiantes



DIANA, Artes Gráficas.
Larra, 6.—Madrid.